



FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

La inobservancia del artículo 18 del TUO de la ley N° 27444 en el Servicio de
Administración Tributaria de Lima, 2016.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

Jhonnathan Alfredo Vargas Rios

ASESOR:

Mgtr. Daniel Fernando Urquiza Maggia

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Administrativo

LIMA – PERÚ

2017

Página del Jurado

Nombre: Castro Rodríguez Liliam Lesly

Cargo: Presidente

Nombre: Aceto Luca

Cargo: Secretario

Nombre: Salas Quispe Mariano Rodolfo

Cargo: Vocal

Dedicatoria.

El trabajo de tesis está dedicado principalmente a mi familia, que fueron las personas que me brindaron el apoyo anímico para poder enfrentar la etapa más importante de mi vida, son ellos los que me motivan a superarme cada vez más y así enfrentar nuevos retos personales.

Agradecimiento.

Debo de agradecer principalmente a mi esposa e hijas, quienes han podido comprender tantos momentos importantes que tuve que dejar de acompañarlas y compartir con ellas para poder culminar mi etapa universitaria, a aquellos buenos profesores que tuve en mi etapa universitaria y a Dios por darme salud y tranquilidad en este arduo camino de mi vida.

Declaración de autenticidad

Yo, Jhonnathan Alfredo Vargas Rios, con DNI N° 40616972, a efectos de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho; declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y auténtica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presenta en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, julio de 2017.

.....

DNI. 40616972

Presentación

Señores Miembros:

Del Jurado de la Escuela Académico Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte, les presento la Tesis titulada “La inobservancia del artículo 18 del TUO de la ley N° 27444 en el Servicio de Administración Tributaria de Lima, 2016”. Con el objetivo de determinar cuál es La inobservancia del artículo 18 del TUO de la ley N° 27444 en el Servicio de Administración Tributaria de Lima-2016, es que planteamos nuestra presente tesis, en razón a determinar cuánto está relacionado la mala ejecución de del artículo 18° del TUO de la ley 27444, y la vulneración al principio del debido procedimiento administrativo y como estos hechos vienen causando una grave afectación a los derechos del administrado y a la sociedad de parte del Servicio de Administración Tributaria en adelante (SAT).

Debemos de recordar que el artículo 18 del TUO de la ley 27444 implica dos supuestos jurídicos que a nuestro entender no se está cumpliendo en la realidad, actos que la administración pública viene haciendo caso omiso, incumpliendo o cumpliéndolo de manera equivocada aparentemente de forma intencional, con miras a causar un perjuicio al administrado.

Estamos hablando del acto de notificación y el debido diligenciamiento que este debe de tener, en materia de deudas no tributarias se viene incumpliendo de forma maliciosa la debida notificación, puesto que el SAT no cumple con un debido acto de notificar las resoluciones administrativas, haciendo que los administrados se encuentren inmersos en procedimientos engorrosos, extremadamente largos y costosos.

La tesis que desarrollaré consta de una primera etapa, que la hemos llamado plan de investigación, en esta unidad vamos a describir la Aproximación Temática, los trabajos previos, así como las teorías relacionadas al tema, las cuales serán nuestro marco teórico y marco conceptual cuyo fin será ilustrarnos y nutrirnos a la realidad del problema con conceptos básicos, tomados de fuentes altamente confiables. Posterior a esto dentro de la primera unidad aún, plantearemos lo que será nuestra formulación del problema de investigación, lo justificaremos tratando de encontrar una razón válida que nos ayude a determinar que realmente existe un problema relacionado a la vulneración de los derechos del administrado. Luego de haber identificado el problema de nuestra investigación plantearemos, la justificación del estudio que estamos presentando, luego en razón de nuestros objetivos, buscaremos las posibles metas a alcanzar, seguido de nuestros supuestos jurídicos.

De igual manera hemos determinado un segundo capítulo, el cual lo denominamos metodología, en este capítulo veremos el tipo de investigación a tratar, así como diseño de la investigación que vamos a emplear, lo cual ya lo tenemos plenamente identificado, que será la investigación cualitativa, cuyos resultados lo vamos a representarlo en cuadros referenciales.

Por otro lado vamos a identificar nuestra caracterización de sujetos, que vendrán a ser las personas a las cuales vamos a entrevistar y serán las que den valor y confianza a nuestra tesis, en este sentido también identificaremos nuestra población que será determinante a la hora de recolectar nuestros datos de información.

Como técnicas de recolección de datos emplearemos las entrevistas y el análisis jurisprudencial, esto debido a que nuestra tesis está dirigida a determinar la validez y la confiabilidad. Por otro lado emplearemos los métodos de análisis de datos que se acomoden mejor a nuestra investigación, como ya lo dijimos nos va servir las fuentes bibliográficas, las entrevistas y todo lo que podamos percibir en la realidad. Dentro

de los aspectos éticos resaltaremos la gran ayuda obtenida de fuentes confiables y seguras.

En nuestra tercera unidad determinada como resultados, vamos a poder entender los cuadros de resultados que hemos podido obtener en nuestras entrevistas, y otras que serán obtenidos gracias a los análisis jurisprudenciales que desarrollaremos, Finalmente plantearemos la discusión del resultado, emitiremos nuestras conclusiones que de seguro servirán para tomar decisiones importantes a futuro en caso de comprobar que se estuvo vulnerando el artículo 18 del TUO de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en este sentido al debido acto de notificación. Finalmente emitiremos una respuesta que de seguro va ayudar a disminuir los posibles casos referentes al problema de investigación de esta tesis, detallaremos la bibliografía que sea necesaria para dar credibilidad de nuestras fuentes y anexaremos algunos documentos importantes. Gracias.

El autor...

ÍNDICE

	Pág.
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración Jurada de Autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
I. INTRODUCCIÓN:	
Aproximación Temática	18
Trabajos Previos	20
Teorías Relacionadas al Tema	24
Marco Teórico	24
Marco Conceptual	34
Formulación del Problema	41
Problema General	44
Problema Específico (1)	44
Problema Específico (2)	44
Justificación del Estudio	44
Objetivos General	45
Objetivos Especifico (1)	46
Objetivos. Especifico (2)	46

Supuestos Jurídico	47
Supuestos General	47
Supuestos Específico (1)	47
Supuestos Específico (2)	47
II. METODOLOGÍA:	
2.1. Tipo de Investigación	49
2.2. Diseño de Investigación	49
2.3. Caracterización de Sujetos	51
2.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	53
2.5.1. Instrumentos de Recolección de datos	53
2.5.2. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos	56
2.6. Métodos de Análisis de datos	56
2.7. Tratamientos de la Información (Unidades Temáticas, Categorización)	57
2.8. Aspectos Éticos	57
III. RESULTADOS	62
3.1. Descripción de resultados de Análisis Documental	
3.2. Descripción de resultados de la Técnica: Entrevista	
3.3. Descripción de resultados de Análisis Jurisprudencial	
IV. DISCUSIÓN	72
V. CONCLUSIÓN	79
VI. RECOMENDACIONES	80
VII. REFERENCIA	81
VIII. ANEXOS	84
Anexo 1: Matriz de consistencia	86
Anexo 2: Ficha de validación de instrumentos	88
Anexo 3: Ficha de validación de entrevista doctora Castro Rodríguez Lesly.	89

Anexo 4: Ficha de validación de entrevista doctor Chávez Sánchez Jaime.	90
Anexo 5: Ficha de validación de entrevista por el doctor Santisteban Llontop Pedro Pablo.	91
Anexo 6: Ficha de validación de análisis jurisprudencial por Israel Ballena.	92
Anexo 7: Ficha de validación de análisis jurisprudencial, Castro Rodríguez Lesly.	93
Anexo 8: Instrumento – Entrevista.	94
Anexo 9: Instrumento Guía de análisis jurisprudencial.	97
Anexo 10: Entrevistas aplicadas a los especialistas jurídicos	98

RESUMEN

Hemos podido identificar que las notificaciones en el Perú por parte del SAT están causando la pérdida de los bienes de los administrados, esto se debe a que el SAT incumple la formalidad y el debido diligenciamiento que debería de tener al hacer conocer una determinada resolución administrativa.

El artículo 18 del TUO de la ley 27444 determina que es la administración pública la encargada de hacer llegar los actos administrativos al administrado, procurando que el diligenciamiento sea el correcto, esto significaría que la notificación personal por parte del SAT sea dada eficientemente, hechos que en la realidad no se está cumpliendo, más aún, este incumplimiento causa la vulneración al debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa.

Palabras claves:

- 1.- Notificacion.
- 2.- Administrado.
- 3.- Diligenciamiento.

ABSTRACT

We have been able to identify that notifications in Peru by the SAT are causing the loss of the managed assets, because that SAT breaches the formality and the due diligence that should have, to make a particular administrative decision.

The TUO of law 27444 18 determines that public administration is in charge of the administrative acts to the managed, ensuring that the processing is correct, this would mean that the personal notification by the SAT be given facts that in reality it is not complying, more efficiently, even this failure causes the violation to the due administrative procedure and the right of defense.

Keywords:

- 1.- Notification.
- 2.-. Administrative.
- 3.-. complying.

I. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo de tesis radica en determinar la inobservancia del artículo 18 del TUO de la ley 27444 por parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima (en adelante SAT) y las consecuencias que esto está causando a los administrados, quienes ven perjudicados sus procedimientos administrativos a causa de un deficiente diligenciamiento de las de notificación, como es de entender los procedimientos administrativos son procedimientos que tienen que cumplir ciertos requisitos entre ellos plazos perentorios, que de no haberse cumplido a tiempo con accionar ante la administración pública, hacen que el administrado pierda sus derecho de defenderse en caso tenga algún procedimiento de cobranza por deuda no tributaria.

Como sabemos la notificación viene a ser el acto por el cual la administración pública da a comunicar una determinada resolución o pronunciamiento con respecto a un trámite administrativo que le es concerniente al administrado, en este sentido la noción de notificación está vinculado a una comunicación o un aviso que debe de cumplir con la intención de dar a conocer actos procedimentales de la administración pública.

Por otro lado debemos de tener claro que el derecho administrativo tiene como finalidad vincular a la administración pública con el administrado, siguiendo y respetando las normas de mayor rango como son el derecho civil y el derecho constitucional. Bajo este concepto podemos decir que la administración pública debe de cumplir la función de administrar todos los actos administrativos que guarden relación con el administrado, bajo el estricto cumplimiento de la ley.

En este sentido es que todas las entidades públicas del Estado tienen el deber de proteger al administrado que llega hasta sus oficinas con la intención de que se le

brinde la atención debida en el momento adecuado y respetando las normas a las que se rigen por ser entidades públicas.

Como sabemos el SAT es un organismo descentralizado de la Municipalidad de Lima, con presupuesto económico y financiero propio, tiene como fin, fiscalizar y recaudar todas las deudas tributarias y no tributarias de la municipalidad.

Pero como bien su nombre lo dice Servicio de Administración Tributaria, tiene la obligación de prestar los servicios al administrado, es ahí donde nace el problema de nuestra investigación, ya que, por muchas denuncias y reclamos de los propios administrados podemos darnos cuenta que este organismo de la municipalidad de Lima viene incumpliendo la norma, específicamente el artículo 18 del TUO de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Pero ¿cómo la incumple?, por antecedentes y demandas ante el Poder Judicial sabemos que los derechos del administrado se vulneran con respecto a las defectuosas notificaciones realizadas por el SAT, pero no solo hay defectos en las notificaciones, mas también hay falsas notificaciones y en otros casos nunca las hay, todo esto con la sola intención de que el administrado no pueda ejercer su derecho de defensa, provocando así que los expedientes lleguen hasta las instancias finales sin una buena refutación por parte del usuario, privándolo así de su derecho de acción , su derecho de defensa y al debido procedimiento administrativo.

En este sentido, podemos darnos cuenta que lo que el SAT pretende es hacer que el administrado pague por obligaciones que muchas veces no es culpable, obligaciones que perjudican no solo económicamente al administrado sino también, moralmente, puesto que, ven perder sus bienes a manos de la administración, quienes la llevan sin reparo a costosos procesos judiciales, procesos a los cuales los administrados no quieren llegar, provocando así el

pago ilegal y apresurado de las multas por no encontrarse en estas situaciones engorrosas.

Estas pérdidas de bienes que afectan a los administrados se deben básicamente a un mal diligenciamiento de los actos de notificación por parte de la administración pública, diligenciamiento que debe de ser observado en procedimientos contenciosos administrativos, los cuales hacen que el administrado tenga que gastar dinero en pagos de abogados y derechos por trámites judiciales, que de haber cumplido con un debido acto de notificación, el administrado no tendría por qué encontrarse en esta situación.

Bien recordamos, por medio del Decreto Legislativo N° 1272, anunciado en el mes de diciembre de 2016, se realizaron diversas modificaciones a la Ley del Procedimiento Administrativo, disponiéndose también la derogación de la ley del Silencio Administrativo, en la misma se plasmó un término de 60 días hábiles para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos apruebe el Texto Único Ordenado de la ley 27444.

Por medio del Decreto Supremo 006-2017 JUS el 20 de marzo del 2017 se publicó El TUO de la ley 27444, haciendo modificaciones al artículo 18 de la anterior ley en mención, señalando expresamente que “La notificación del acto es practicada de oficio y su debido diligenciamiento es competencia de la entidad que lo dictó. La notificación debe realizarse en día y hora hábil, salvo regulación especial diferente o naturaleza continuada de la actividad” (artículo 18.1). Por otro lado el numeral (2) señala textualmente “La notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad, por servicios de mensajería especialmente contratados para el efecto y en caso de zonas alejadas, podrá disponerse se practique por intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del administrado”.

Debemos de comprender que lo que pretendemos discutir es la inobservancia de la aplicación del artículo 18 de la ley 27444, que estuvo siendo aplicado de forma irregular por el SAT, la mala aplicación del diligenciamiento de la notificación a estado causando pérdidas económicas a los administrados a causa de los procedimientos dejados de atender en su debido momento afectando el derecho a la defensa y un debido procedimiento administrativo.

Como sabemos el diligenciamiento a lo que hace referencia el mencionado artículo debe de ser efectuado de oficio por parte de la administración pública, quienes tiene la obligación de hacer llegar el respectivo acto de notificación con la resolución que este traerá de acuerdo a la formalidad que exige la ley a manos del administrado, pero esto no ha venido ocurriendo en la actualidad dado que, el SAT no ha estado notificando correctamente dentro del plazo establecido, haciendo que se pierda el derecho a impugnar dichos procedimientos, esto es a que el administrado cuando ha querido ejercer su derecho de defensa se ha dado con la sorpresa que la notificación ya se había dado con anterioridad, haciendo perder el derecho a impugnar dichos actos.

Si bien sabemos que la notificación de un acto administrativo surte efecto al día siguiente de su entrega, poco o nada se puede hacer cuando el SAT en su sistema ya tiene como bien notificado con fecha anterior a la que al administrado le ha sido consignado dicho acto, esto es porque el diligenciamiento que ha venido dando el SAT no ha sido correcto, dejándolo muchas veces en otros domicilios y asignando como correcto el domicilio que el administrado deja en su escrito inicial del procedimiento, otras veces dejándolo debajo de la puerta sin constatar que hay personas dentro, esto con la sola intención de notificar el acto con fecha pasada a su debido momento, y otras muchas veces nunca han sido notificadas pero el SAT las tiene como bien notificadas en su sistema virtual, lo cual dicho sea de paso no es accesible con transparencia al usuario.

Cabe indicar que la notificación mal efectuada es la principal causa del presente problema de tesis. El SAT está causando que el administrado tenga que buscar la protección a sus derechos ante los órganos de mayor jerarquía como es el caso del Tribunal Constitucional, quien ya se ha pronunciado al respecto en el Exp. N.º 1741-2005-PA/TC. Señalando que:

“Al no haber tenido una correcta observancia en la notificación, por la parte de la municipalidad emplazada, podemos decir que dicho acto es nulo por causal insubsanable y por ende todo el procedimiento administrativo, toda vez que la actora no tuvo la posibilidad de cuestionar los actos administrativos en su debido momento, ello es, debido a la falta de notificación, lo cual implica además la vulneración a su derecho de defensa” (abril 2005).

Aproximación Temática.

La presente tesis surge a raíz de la inobservancia que viene teniendo el SAT con relación a lo que refiere el artículo 18 del TUO de la ley 27444, esto es la obligación que tendría la administración pública de notificar los actos administrativos con un debido diligenciamiento, actos que no se están dando en la realidad, haciendo que el administrado pierda su derecho de defensa y sintiendo vulnerado su derecho a un debido procedimiento administrativo.

Como se sabe a causa de las notificaciones mal efectuadas por el SAT se están generando procedimientos judiciales vía contencioso administrativo a las cuales tienen que llegar los administrados con la única finalidad de hacer valer sus derechos que les fueron negados en la vía administrativa esto a causa de no haber sido correctamente notificados.

El problema radica en que el SAT no ha estado notificando de acuerdo a lo señalado en la referida ley, según versión de los propios administrados los actos de notificación no han llegado a sus domicilios, otros han llegado con

fechas atrasadas o pasadas dejadas por debajo de la puerta, con toda la intención de causar un perjuicio al administrado. Lo peor de esto es que, la administración pública ósea el SAT las tiene consideradas como bien notificadas, provocando que el administrado al querer reclamar por escrito por medio de algún recurso impugnatorio, este le sea denegado por presentarse a destiempo o fuera del plazo establecido, así también ha sido ratificado por el tribunal constitucional.

Hoy en día las demandas ante el Poder Judicial, en procesos contenciosos administrativos en contra del SAT, así como quejas y reclamos por parte de los administrados vienen demostrando que este organismo descentralizado de la municipalidad metropolitana de Lima, incumple la aplicación correcta de lo regulado en el artículo 18 Del Texto único Ordenado de la Ley 27444 aprobado por el D.S. N° 006-2017-JUS.

Los administrados están viendo quebrantados sus derechos siendo perjudicados por este organismo público, en razón, que sus procedimientos administrativos se ven afectados por la vulneración al artículo 18° de la ley 27444, ya que al no ser notificados correctamente no pueden ejercer de forma oportuna su derechos de defensa, haciendo que en consecuencia pierdan sus bienes en Procedimientos Coactivos.

El caso es, que al no cumplirse los debidos actos de notificación en los plazos y términos señalados, se está provocando no solo daño económico al administrado sino también se está contribuyendo a la carga procesal en las salas especiales del contencioso administrativo del poder judicial.

Cabe señalar que el SAT, está tomando poco interés de resolver el conflicto con el administrado, desprotegiéndolo y haciéndole caer en errores muchas veces insubsanables. Este incumplimiento en el que recae la administración tributaria básicamente por no notificar de forma debida y en el plazo correcto,

causa que el administrado tenga pérdidas económicas llegando muchas veces hasta perder sus bienes, los cuales son exigidos en un procedimiento coactivo hasta llegar a su embargo en el caso de no cumplir con una obligación muchas veces injustas e arbitrarias que devienen de procedimientos mal llevados sin la observancia del principio al debido procedimiento administrativo.

Como podemos darnos cuenta, el problema se genera fundamentalmente que al no haber diligenciado el acto administrativo con una debida notificación al administrado, hacen que este pierda su derecho de acción y por ende de defensa, es así si la notificación no llega a manos del recurrente o si llega fuera del plazo determinado por la ley. El punto está en que a los supuestos antes mencionados el SAT los tiene como bien notificado en fecha acorde con la ley, amparándose así como prueba más fuerte ante el indefendible que no tiene prueba alguna del mal diligenciamiento.

A lo expuesto el administrado, tendría la carga de la prueba al querer demostrar un acto mal diligenciado, pruebas que no los tiene, o los obtiene cuando los solicita ante el órgano administrativo, dándose por enterado ahí que toda acción que pretenda realizar para impugnar dicho acto de notificación será improcedente al hallarse fuera de plazo.

Es por ello que no teniendo posibilidad que sus reclamos sean amparados en la vía administrativa no tienen más opción que recurrir a la vía judicial una vez agotada la vía administrativa, provocando que la carga procesal en los juzgados contenciosos administrativos sea mayor cada año a consecuencias de las demandas interpuestas en contra del SAT.

El asunto es que el administrado no tendría por qué llegar hasta este punto si sus reclamos en vía administrativa se consideran y respondieran a sus debido momento, pero la administración no está notificando con el debido diligenciamiento, sin hacer llegar dicho acto al administrado, es más el

administrado muchas veces no está ni enterado de la obligación ya que la entrega de las notificaciones son erradas o falsas y en el colmo de los casos la misma administración tributaria incumple con dejar la información en su portal web de expedientes haciendo caer en error al administrado, o provocando culposamente al error y así de esta manera vulnerando su derecho a un correcto procedimiento administrativo, a un correcto acto administrativo (notificación) y a un derecho de defensa que por ley todas las personas tenemos por mandato de la constitución.

Al respecto el Tribunal Constitucional se ha pronunciado señalando en sentencia Exp. N° 1741-2005-PA/TC:

“El artículo 20° de la Ley N.° 27444 establece entre las formas permitidas de notificación del acto administrativo, que estas deben de ser por notificación personal al afectado, en su domicilio; mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico, pero siempre que estas formas de notificación virtuales hayan sido solicitadas por el administrado, y mediante publicación en el diario el peruano. La notificación personal se hará en las referencias que indique el expediente. Por otro lado en caso que no se haya encontrado domicilio alguno, la autoridad debe agotar su búsqueda mediante los medios que estén a su alcance, recurriendo a fuentes de información de las entidades de la localidad”.

Trabajos Previos.

Antecedentes a nivel internacional.

Dentro de otras tesis hemos podido identificar a Benavente, (2009) quien sostiene que “Sobre la naturaleza jurídica de la notificación, la doctrina ha descartado que la misma sea la de un procedimiento administrativo, porque este último consiste en una serie de trámites y formalidades exigidas para la realización de un acto administrativo, y le permite un doble propósito: perseguir, en primer lugar, la apropiada y correcta marcha del ente administrativo; y, en segundo lugar, tutelar, preservar los derechos e intereses de los administrados,

para que no sean afectados por la expresión de voluntad de la Administración” (p. 40).

Benavente, considerar también a la notificación “como una condición de eficacia del acto administrativo se conviene con su naturaleza jurídica, dado que, la notificación es un medio que involucra la intervención de conocimientos de actos y situaciones jurídicas de la Administración a fin de que surta efectos entre los administrados, cualquier ineficacia de la notificación causaría la vulneración a los derechos de estos” (2009, p. 42).

Otras de las tesis encontradas es la del argentino Gordillo, (2007) quien nos ilustra diciéndonos que “Las legislaciones suelen regular de manera puntual, enunciativamente o no, los casos en que los actos administrativos de carácter particular deben obligatoriamente ser notificados a los interesados. Sin embargo, resulta bastante claro que todos los actos con pretensión de producir efectos jurídicos requieren siempre tal notificación para que los efectos se produzcan y el acto nazca al mundo jurídico.¹⁴⁴ La confusión proviene del concepto de acto administrativo que a veces se toma como fuente. Para nosotros, acto administrativo es el que produce efectos jurídicos y como no puede producirlos sin publicidad (notificación), no existe “acto administrativo” productor de efectos jurídicos que sea tal sin notificación al interesado” (p. 303).

Este autor concluye señalando que “Todo acto individual que la administración quiera que sea oponible a las partes, e incluso jurídicamente existente, tiene que notificarlo, a efectos de que no se vulnere los derechos del administrado. No hay otra forma de quedar legalmente informado y ser oponible el acto, que mediante la notificación expresa, regular y válida. Por ello no tiene sentido teórico ni práctico regular supuestos casos de notificación si es que estos no son correctamente dirigidos hacia el administrado, ya que todos los actos destinados a producir efectos jurídicos deben ser notificados en debida forma” (Gordillo, 2007. P. 303)

Es oportuno señalar que Lugo Gonzales sostiene al respecto:

Lugo, (2002), “que la forma más perfecta de notificar es haciéndola personalmente, así también los tratadistas sostienen que la forma ideal para notificación personal es la correcta puesto que produce los efectos deseados por la parte demandante. Se debe entender que la notificación tiene las formalidades legales para así garantizar los principios del procedimiento, y dar a conocer a la parte demandada las actuaciones realizadas en un proceso por la autoridad administrativa, en este sentido la notificación garantizara que la parte afectada pueda oponer sus descargos en el momento oportuno, en razón de un debido procedimiento administrativo (p. 219).

Así también vuelve a señalar Lugo, “La notificación es un elemento más que importante en el derecho procesal, y más aun en el sistema jurídico mexicano, pero está causando problemas en el sistema jurídico, puesto que la notificación que deberían darse de forma personal mantiene conflictividad en la legislación e interpretación, por lo mismo, resulta de imperiosa necesidad la existencia de mayor claridad legal (2002, p. 221).

Retortillo, sostiene con respecto a la Administración Pública:

“La Administración Pública, camina con tal lentitud, que el llamado impulso de oficio es algo que no se está dando, en el estado español, ante un pedido o solicitud por el administrado se responde con un papel pero estos no hacen nada por el contrario hacen que el administrado tenga problemas a hacer un seguimiento de este modo se hace difícil el resultado de lo solicitado. ¿Se ejecuta algún cálculo de tiempo empleados en los diferentes trámites? Existe el prejuicio de que sin recomendación, sin que haya alguien que interceda, la administración no trabaja al ritmo que debería, muchas veces tienen toda la razón” (1983, p. 64).

Por lo visto el mal manejo del Estado con relación a la administración pública y a sus leyes se producen en muchos países. Esto nos da indicios claros que el derecho administrativo está funcionando con deficiencias, más aún en los países donde no existe una eficiente fiscalización a las entidades públicas.

En este sentido Retortillo, (1983), “sostiene que en un país como México, los órganos administrativos vienen vulnerando los derechos procesales del administrado así, como una serie de principios, este autor acusa de forma directa a la indebida notificación, esta falta de impulso procesal está causando pérdidas al administrado y vulnerando el debido procedimiento administrativo a tal punto que se ha llegado a pensar en modificar las leyes establecidas para el derecho administrativo en este país” (1983, p. 64).

Desde otro panorama Retortillo (1983), nos señala que “en la legislación española también es deficiente la administración a tal punto que lo califica como una tortuga, esto a su lentitud en los actos procesales emitidos” (p. 65).

De este modo también funciona en nuestro país, por lo que podemos darnos cuenta de que es necesario adaptar algunas normas en la regulación administrativa, como podría ser las sanciones penales de carácter efectivas a los funcionarios que perturben la correcta y eficiente función administrativa.

En este sentido y a efectos que el administrado, se sienta protegido o tutelado por el Estado es necesario de un regulador de carácter privado que sancione con fuertes multas a la administración en caso de incumplimiento de la ley 27444, con el fin de resarcir el daño causado hacia los administrados por las pérdidas económicas que los procedimientos puedan causales.

Por otro lado considero también que es hora de implementar una forma más eficiente de notificación, la cual debería de consistir en una notificación electrónica, esta se implementaría progresivamente por todo el Perú, esta

forma electrónica de notificación en la administración pública consistiría en que todo administrado al iniciar un procedimiento administrativo sea cualquier procedimiento, tenga una página de notificación personal, la cual tendría una clave secreta que solo sería manejado por el administrado y la entidad pública, ello con el fin de que a todo administrado sea capaz de consultar su propia página de notificaciones electrónica la cual garantizaría que sus notificaciones sean emitidas dentro del plazo establecido, así mismo sería sumamente garantista para el órgano administrativo, puesto que si realmente emite sus actos o resoluciones dentro del plazo de ley, tendría todas las garantías de poderlo demostrar ante el administrado en tiempo real puesto que esta página de notificaciones tendería día y hora de dichos actos notificados.

Por otro lado también sería importante implementarlo para aquellas deudas no tributarias, aquellas que nacen de la imposición de una infracción a la administración pública o ante una infracción de tránsito de ser el caso, en estos casos en los que se levanta un acta de infracción también sería necesario que en dicha acta de infracción este claramente establecido la clave de la página de notificaciones que se generara por dicho acto administrativo la cual garantizara un debido procedimiento administrativo desde el primer momento de la infracción.

Antecedentes a nivel nacional.

Dentro de los trabajos previos a nuestra investigación también hemos podido encontrar que el estado ya había reconocido el problema años atrás, es por ello que, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, emite la resolución administrativa N° 247 del año 2009, en la que se presenta como posible solución al problema del diligenciamiento de las notificaciones y señala que “en los últimos años ha quedado evidenciado que las notificaciones realizadas por medios convencionales (tradicionales) exceden notablemente los plazos procesales, en detrimento de los intereses de los justiciables, toda vez que las notificaciones dirigidas a direcciones domiciliarias, tardan demasiado en ser diligenciadas, en

razón a la elevada carga procesal que soportan y al engorroso procedimiento empleado, originando dilación innecesaria de los procesos y desazón en las legítimas aspiraciones de justicia de los usuarios, contribuyendo una de las mayores preocupaciones de las instituciones involucradas en la administración de justicia”.

Más adelante el mismo cuerpo normativo hace alusión a una posible solución indicando que “En tal sentido, resulta necesario aprovechar el uso de la nueva organización administrativa y los avances de la tecnología de la información (...) la función de regular y contribuir mediante la emisión de normas apropiadas que coadyuven a la implementación de nuevos procedimientos, acorde con las necesidades de la población”.

Es preciso entender entonces que, el Consejo Ejecutivo de Poder Judicial ha decidido implementar el uso de mecanismos electrónicos a raíz del gran problema que se suscitaba por no realizar un buen diligenciamiento de los actos de notificación, en cuyo caso, señala que al no poderse cumplir adecuadamente con la notificación dentro de los plazos establecidos estaría afectando notablemente el derecho de defensa de los administrados, dado que estos no podrían defender sus interés dentro del plazo regulados por la ley.

Por otro lado, señala Pando, (2011). “Mi preocupación con respecto a las modificaciones a lo regulado sobre las notificaciones, se presenta cuando por ejemplo, no se encuentre a nadie en el domicilio por primera vez, según la nueva regulación, en esta oportunidad se deberá dejar una constancia de visita con copia que ira anexado al expediente principal, previa fecha de visita posterior de la cual al volverse a frustrar dicho acto, se dejara la notificación por debajo de la puerta con un acta la cual ira directo al expediente.

Esto podía haber sido una buena solución pero deficiente desde mi punto de vista, la primera es que si al notificarse por segunda vez solo se deja la notificación por debajo de la puerta sin haberse descrito las referencias del domicilio, esto generaría una inseguridad a dicho acto y por lo tanto vulneraría

los derechos del administrado dado que no tendría credibilidad sobre dicha notificación.

La segunda visita no cumple con el principio de razonabilidad y afecta los derechos del administrado, el hecho que se programe una segunda visita para notificar y que no se señale la hora en la cual se le hará la entrega de esta notificación limita a que el administrado tenga que estar pendiente de la llegada del notificador a su domicilio, esto generaría la pérdida del un día de trabajo de dicho administrado.

Lo que el actor indica es que en el supuesto que la notificación sea programada para día hábil de trabajo, esto perjudicaría con las labores de trabajo de cualquier administrado, lo cual sería desde mi punto de vista inútil, puesto que nadie va dejar de trabajar el día entero para recibir una notificación. Si a todo esto le agregamos la falta de actualización de domicilios en los documentos de identidad y la ausencia de exigencias para notificar que tiene la administración pública, la combinación sería perjudicial para la administración y el administrado y afectaría la finalidad de la notificación personal” (P. 259, 260).

A nuestro entender lo que el autor quiere decir, es que el Decreto Legislativo 1029, si bien intenta regular el debido diligenciamiento del acto de la notificación, este caería también en errores insubsanables que harían que la notificación sea mal dirigida y por ende no surta efecto para que el administrado pueda ejercer su derecho ante la administración pública.

Es así como afirma el autor no se podrá notificar correctamente a la parte interesada, puesto que el primer acto de notificación no dejara expreso pronunciamiento de la segunda llegada al domicilio y si lo hiciese no tendría hora exacta para su recepción, creando que de forma intencionada el notificador tenga que dejarlo bajo la puerta sin la certeza de que esta sea recibida por el administrado.

Por otro lado debemos de mencionar que el Servicio de Administración Tributaria, no ha podido controlar el debido diligenciamiento de la notificación que hace referencia el artículo 18 del TUO de la ley 27444, puesto que además de no tener mayor preocupación por realizar una correcta notificación de las resoluciones administrativas, este no ha cumplido en emitir dichos actos ni siquiera en su portal de resoluciones administrativas, haciendo más aún imposible que el administrado se pueda defender.

De este modo también funciona en nuestro país, por lo que podemos darnos cuenta de que es necesario adaptar algunas normas en la regulación administrativa, como podría ser las sanciones penales de carácter efectivas a los funcionarios que perturben la correcta y eficiente función administrativa.

En este sentido y a efectos que el administrado, se sienta protegido o tutelado por el Estado es necesario de un regulador de carácter privado que sancione con fuertes multas a la administración en caso de incumplimiento de la ley 27444, con el fin de resarcir el daño causado hacia los administrados por las pérdidas económicas que los procedimientos puedan causales.

Por otro lado considero también que es hora de implementar una forma más eficiente de notificación, la cual debería de consistir en una notificación electrónica, esta se implementaría progresivamente por todo el Perú, esta forma electrónica de notificación en la administración pública consistiría en que todo administrado al iniciar un procedimiento administrativo sea cualquier procedimiento, tenga un página de notificación personal, la cual tendría una clave secreta que solo sería manejado por el administrado y la entidad pública, ello con el fin de que a todo administrado sea capaz de consultar su propia página de notificaciones electrónica la cual garantizaría que sus notificaciones sean emitidas dentro del plazo establecido, así mismo sería sumamente garantista para el órgano administrativo, puesto que si realmente emite sus actos o resoluciones dentro del pazo de ley, tendría todas las garantías de

poderlo demostrar ante el administrado en tiempo real puesto que esta página de notificaciones tendería día y hora de dichos actos notificados.

Por otro lado también sería importante implementarlo para aquellas deudas no tributarias, aquellas que nacen de la imposición de una infracción a la administración pública o ante una infracción de tránsito de ser el caso, en estos casos en los que se levanta un acta de infracción también sería necesario que en dicha acta de infracción este claramente establecido la clave de la página de notificaciones que se generara por dicho acto administrativo la cual garantizara un debido procedimiento administrativo desde el primer momento de la infracción.

Teorías relacionadas al tema.

Cabe indicar que en el desarrollo de esta parte de nuestra tesis, si bien está destinado a discutir la inobservancia del artículo 18 del TUO de la ley 27444 y su relación con el SAT, esto debido al desatinado diligenciamiento que tiene la administración pública con las notificaciones, es necesario desarrollar otros derechos vulnerados que están inmersos en esta mala práctica del SAT, como son; la vulneración al derecho al debido procedimiento administrativo, el derecho de defensa, los actos procedimentales, la notificación, los plazos de notificación entre otros, conceptos que enriquecerán mas nuestro trabajo de investigación, conceptos que como ya lo hemos dicho tienen relación directa con la vulneración a una debida notificación.

Dentro de nuestro marco teórico vamos a poder determinar que dentro los problemas que afectan al administrado esta la incorrecta notificación, esta que es generadora de nuestra investigación, puesto que al no cumplir correctamente el artículo 18° del TOU de la ley 27444, ley del Procedimiento Administrativo General, el administrado, siente vulnerado su Derecho de Defensa y por resultante el del Debido Procedimiento. En este sentido

podemos señalar que si bien el artículo 18° de la ley en mención señala expresamente que es la Administración Pública la obligada a notificar, y que de este acto administrativo depende el correcto procedimiento y formalidades que ha de cumplir el administrado.

Bustillo, nos dice “Podemos afirmar entonces que notificar es aquel acto real o presunto, que tiene como finalidad poner a las partes el conocimiento de las decisiones que emanen de un proceso judicial. En este sentido entendemos que la finalidad de la notificación no causara su fin si no fue comunicado al administrado, a tal punto que esta inobservancia causaría la vulneración al debido procedimiento administrativo” (2014, p. 106).

Ahora al referirnos a una obligación de notificar, estaremos hablando del acto administrativo que por orden de la ley debe ser cumplido por la administración pública respetando los plazos y la formalidad que de esta provengan. Es así que la obligación de notificar vendría a ser el acto administrativo por el cual se iniciarían a desarrollar una serie de procedimientos donde primaria las garantías que debería de ofrecer la administración pública, dichas garantías estarían relacionadas con los principios del derecho como son el derecho a la defensa y a un debido procedimiento administrativo.

Es así, como ya lo hemos estado mencionando el artículo 18 del TUO de la ley 27444, Ley Procedimiento Administrativo General, la cual obliga a que sea la Administración Pública la encargada de notificar los actos administrativos, esto con la finalidad que el administrado pueda hacer valer su derecho de defensa, cosa que no se está dando o se da de forma defectuosa, y es así que el administrado viene siendo perjudicado y llega a perder sus bienes en los procedimientos coactivos que la SAT, les está iniciando.

De este modo lo menciona la sentencia de la Corte Suprema en Casación N° 8125-2009. Del Santa:

“(…) que cuando la administración conceda la nulidad de un acto administrativo esta debería de ser notificado de forma obligatoria por la entidad al administrado a fin de no afectar su derecho de defensa”

“Como podemos apreciar en la sentencia de esta casación, los jueces señalan claramente que es la administración pública es la obligada de notificar al administrado, los actos administrativos a fin de que estos surtan sus efectos y el administrado puedan ejercer sus derechos de defensa en pos de un debido procedimiento administrativo” (párr. 7).

Así también lo entiende la legislación española en análisis escrito por Joaquim Martí Martí, abogado, de la Universidad de Barcelona, en su blog, revistas prácticas de tribunales:

“Para el Tribunal Constitucional, quien está en la obligación de notificar de forma personal al demandado es la administración pública” (Martí, 2008, párr. 6).

Entonces bajo estos conceptos que ponen en evidencia nuestros problemas en la administración pública, justamente porque no está cumpliendo con el TUO de la ley 27444, y su artículo 18°, está provocando que la carga procesal en los juzgados de procesos contenciosos administrativos sean más frecuentes.

Pero como ya lo formulamos al inicio de nuestra tesis, la administración pública viene causando daños al administrado, en el sentido que esta serie de derechos tutelados por el estado no son cumplidas de manera eficiente por la administración, a tal caso parece ser que la ley 27444, solo la cumplen de acuerdo a lo que les conviene he ahí la causa principal del problema que estamos tratando.

Al respecto, existe un pronunciamiento por parte de la Defensoría del Pueblo, a causa de tantas quejas de los administrados que sienten vulnerados sus derechos como tales.

La Defensoría del Pueblo presentó su informe denominado "Servicios de Administración. Hacia una cultura de servicio al administrado", que recoge los casos de vulneración de derechos y en donde se involucra a funcionarios de los Servicios de Administración Tributaria (SAT), en lo que se refiere a los problemas derivados por la imposición de papeletas de infracción de tránsito.

El informe da cuenta de cobros por tramitación que limitan el derecho de propiedad, la demora en la atención de pedidos de acceso a los expedientes de ratificación de Ordenanzas Distritales con contenido tributario, y las quejas por cobros excesivos en los trámites.

La Defensoría del Pueblo pide a las jefaturas del SAT que tengan presente que el aumento de los niveles de recaudación no es la única finalidad de los organismos recaudadores de tributos, sino el respeto de los derechos de los administrados y contribuyentes (La Republica, 2006.párr 3, 4,5).

Por lo visto a causa de las numerosas quejas presentadas a la Defensoría del Pueblo, por parte de los administrados en contra del SAT, se pudo conocer que este órgano de la municipalidad no está actuando de forma correcta, a tal punto que los administrados sienten vulnerados sus derechos, según la Defensoría del Pueblo las quejas más frecuentes son:

“Retardos injustificados en la atención de solicitudes de los administrados y contribuyentes, desconocimiento de beneficios tributarios otorgados por diversas normas, cobros arbitrarios a quienes no son deudores tributarios, cobro de tributos cancelados, Interpretación extensiva de las normas tributarias para exigir el pago de tributos, cobros de papeletas por

infracciones vehiculares a quienes no son propietarios del vehículo, denegación inmotivada de solicitud de fraccionamiento, **notificaciones defectuosas**, problemas y defectos de sus sistemas informáticos, inobservancia de las reglas del debido procedimiento (actuación del servicio de administración tributaria y la municipalidad metropolitana de lima, 2005,1,2,3,4).

En este sentido la Defensoría del Pueblo es clara en señalar en su informe N ° 98, como el Servicio de Administración Tributaria está afectando de manera sistemática y se burla del los derechos del administrado, objeto de esta tesis. Podemos afirmar entonces que el acto de notificación es fundamental e importante para que el administrado pueda iniciar su derecho a la defensa.

Ahora yendo al problema de nuestra investigación, es necesario señalar que el SAT, como ya lo hemos dicho viene vulnerando el derecho del administrado puesto que no está notificando o incumple de forma correcta el acto de notificar haciendo caer en error al administrado. Muchas de estas notificaciones son realizadas fuera del plazo establecido por la ley, otras veces se notifica en domicilio distinto al administrado, otras veces nunca llegan a manos de los administrados y lo peor de esto es que el SAT los tiene como bien notificados, haciendo que al momento de reclamar o presentar recurso impugnatorio alguno estos sean rechazados por presentarlos afuera del plazo regulado por la ley 27444.

En este sentido la señora Rosa María Palacios en su Blog de Política Independiente nos expresa a manera de reflexión y queja lo que le sucedió con la SAT, y como este organismo la perjudico al no haberla notificado correctamente.

“Lo que no da ninguna esperanza es el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima. En la primera gestión de Luis Castañeda Lossio los abusos fueron extensos y documentados el 2004 en el programa Prensa Libre que dirigí y conduje en América Televisión. El recuerdo de tantas personas indignadas es imborrable. Se moderaron para la reelección pero

ahora, parece que han vuelto a las andadas. Más, sabiendo que la reelección está prohibida. Debemos alertar a todos y cuidarnos de estos atropellos” (Palacios, 2015, párr. 2).

“Lo que me ha pasado le debe estar pasando a cientos o a miles de limeños. El día martes 11 de agosto encontré bajo mi puerta (sin ningún cargo para firmar) un documento que señala en letras gigantes: regularice su deuda y evite la captura de su vehículo. La carta estaba dirigida a mí y señalaba que los dos automóviles que están a mi nombre y el de mi esposo tenían Embargo en forma de Secuestro Conservativo Orden de Captura por la falta de pago de una multa de nada menos que S/. 892.60 soles desde el 12 de marzo del 2015”. (Palacios, 2015, párr. 3).

“No tengo ningún problema en pagar por una infracción. Es un deber hacerlo y una manera educativa de no volver a incumplir una norma. Pero resulta que las infracciones, si se pagan al momento de ser notificadas, tiene un descuento sustancial. Me indican que puede llegar a ser el 90% de la multa. La infracción es de marzo y jamás se notificó. Es obvio que es a propósito, con el fin de evadir el descuento que está garantizado por las normas. De ese modo, a expensas del contribuyente, el SAT hace su gran negocio y aumenta la recaudación. Si notifica como mandan las normas se le acaba el jueguito. ¿O pretende el SAT que vayamos todas las semanas a averiguar si tenemos foto papeletas o no? Usted, que me lee, tal vez tenga una infracción vigente y como yo, no lo sepa”(Palacios, 2015, párr. 6).

“Lo mismo que dije del fraccionamiento, digo del descuento. Si al señor Castañeda Lossio no le gustan las normas que se tome el trabajo de derogarlas. Mientras tanto, el descuento para el buen pagador está vigente. Pero si te ocultan la infracción por 5 meses, ¿Cómo diablos puedes ser un buen pagador? Si me mandan un papel para que evite la captura de mis autos, ¿acaso no está probado que si conocen mi

domicilio y pueden notificarme? ¿Me puede explicar alguien porque permitimos este abuso?”.

“Como podemos darnos cuenta en esta publicación de la señora Rosa María Palacios reportera de noticias y abogada de profesión, señala claramente el gran problema de la SAT, con respecto a las notificaciones defectuosas, haciendo que el administrado pague fuertes sumas de dinero sin impórtales un correcto procedimiento administrativo y vulnerando el derecho de defensa del ciudadano” (Palacios, 2015, párr. 7).

Ahora ¿qué está sucediendo?, el administrado al ver sus derechos siendo vulnerados por la administración pública, no tiene más opciones que buscar hacer valer sus derechos por la vía judicial en procesos contencioso administrativo, cual implica pérdidas económicas para este.

En tal sentido ya lo ha señalado Galindo de esta manera expresa: “Si se presenta una indebida notificación, o una notificación irregular, la demanda que se presente ante el contencioso administrativo no podrá ser tomada como no admitida, puesto que, no interesa que no se haya agotado la vía administrativa, esta conclusión es necesaria puesto que al verse vulnerado un derecho como el debido proceso o el derecho de defensa, entonces se estaría vulnerando la constitución” (2006, p.331).

(...) “que ante el fenómeno de indebida notificación es necesario acudir ante el órgano judicial, vía proceso contencioso administrativo, de esta manera haremos valer nuestros derechos de defensa en tal sentido el de un debido proceso” (p. 331).

Las notificaciones defectuosas como son la no entrega de estas, y la entrega en otros domicilios, hacen principalmente que el administrado incumpla con la administración y deje pasar el tiempo por el desconocimiento de dichos actos.

Ahora estas notificaciones defectuosas en su mayoría son a consecuencias de las empresas notificadoras, pero hay que reconocer que la responsable es el ente administrativo, también hemos podido ver que no se notifica y sin embargo la administración la tiene como si lo hubiera hecho, pero, deja de anunciarlo en su portal de notificaciones vulnerando más aún el derecho del administrado.

El procedimiento administrativo viene a ser todos los actos y diligencias procedimentales que sean ejecutados tanto por el administrado como por la administración pública. Bajo este concepto simple pero contundente del procedimiento administrativo, también podríamos complementar que el procedimiento administrativo tiene como fin, resolver los conflictos que se susciten entre el administrado y la entidad, por tanto generaría derechos y obligaciones para ambas partes por igual.

La administración pública viene vulnerando un debido procedimiento Administrativo, ya que al no cumplir con la adecuada notificación hacen que el administrado no pueda cumplir con su derecho de defensa, perjudicándolo y vulnerando el Principio del debido procedimiento administrativo.

El principio del debido procedimiento administrativo es el que garantiza que el administrado exponga sus testimonios, ofrezca y produzca pruebas y a adquirir una decisión motivada en pleno derecho.

“En los casos de infracción de tránsito, se conoce que muchas veces las faltas son cometidas por conductores que no tienen la condición de propietario del vehículo, en ese sentido, la policía de tránsito e inspector municipal imponen multa directamente a los citados conductores, sin conocimiento y/o participación del propietario del vehículo materia de infracción, por lo que es obligación del SAT de Lima notificar debidamente al propietario del vehículo respecto de la sanción impuesta, a efectos que éste tenga cabal conocimiento de la misma y pueda ejercer su derecho de defensa, acorde con lo exigido por el debido procedimiento administrativo, cautelando sus intereses que podrían verse afectados a través del inicio irregular del procedimiento coactivo” (Jurisprudencia en materia de Revisión Judicial, 2013. Párr. 29).

En la actualidad el SAT de Lima vienen vulnerando el derecho a un debido procedimiento administrativo así lo señalan las sentencias del Tribunal Constitucional en el expediente N.º 03122-2012-PA/TC, argumento: 33.2.

“El debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos”

De modo similar lo expone también la sentencia: Exp. N.º 3741-2004-AA/TC.

“El debido procedimiento en sede administrativa es fundamental para proteger los derechos del administrado, esto es en relación al poder sancionador de la administración, por lo tanto representa una garantía al sancionado”.

El debido procedimiento administrativo resguarda la posibilidad de poder ejercer el derecho de impugnar las decisiones de la administración, llegando si es el caso a solicitar la tutela jurisdiccional ante el proceso contencioso o ante el mismo tribunal constitucional vía proceso de amparo.

Ahora con respecto a Los plazos de notificación vienen a ser de suma importancia para el administrado, ya que, este guarda el tiempo donde el administrado pueda ejercer su defensa, tal es así que si este plazo de notificación no se cumple, o en otras palabras no se sabe, perjudicaría y

vulneraría el debido procedimiento administrativo, y en consecuencia a la posibilidad que administrado pueda impugnar dichos actos en su debido tiempo.

La Ley del Procedimiento Administrativo General, expresa en su artículo 24.1, que toda notificación debe darse dentro del plazo de 5 días, a partir de la emisión del acto que se notifique.

Estos plazos de notificación vienen siendo incumplidos por el SAT de Lima, tal es así que muchas notificaciones llegan en meses a manos de los administrados, sin contar que muchas no llegan, es así que se vulnera el derecho de defensa, puesto que el administrado no tiene entendido del procedimiento a seguir, pero lo peor de esto es que el SAT si lo tiene como bien notificado, creándose así la vulneración de los derechos hacia el administrado.

Para Guillermo Cabanellas, “plazo significa el tiempo que se fija para que uno acciones un trámite, procesalmente hablando es el tiempo que tienen las partes para afrontar de manera oportuna un proceso en el que estén inmerso, en la cual estos podrán presentar sus pruebas o alegar situaciones jurídicas en vías de un correcto proceso. El plazo expresado en días se computa a partir del día hábil siguiente de la notificación, o a la publicación del acto salvo que se fije una fecha posterior o se trate de publicaciones sucesivas, en la que corre a partir de la última” (p.87).

De esta manera el Ministerio de Justicia se pronuncia con relación a los plazos mal efectuados por la administración pública y señala:

“La ley garantiza que los plazos establecidos sean una garantía para que el administrado pueda obtener respuesta a sus inquietudes, y de esta manera no se mantengan en una incertidumbre jurídica lo cual podría generar una pérdida a la seguridad del administrado” (p.12).

Por medio de la garantía que propone la ley el administrado estará informado en el momento oportuno, para esto se entiende que la notificación implica que las partes tengan conocimiento de el acto administrativo y así poder hacer sus descargos respectivos.

Con respecto al derecho de defensa de los administrados queda claro que a lo largo del desarrollo de la tesis es evidente que el SAT de Lima, viene vulnerando el debido procedimiento y por consiguiente el derecho de defensa, el cual está contemplado en la constitución artículo 139 inciso 14. Cabe mencionar también que esta inobservancia de parte del SAT genera que el administrado busque hacer valer su derecho ante los órganos jurisdiccionales en procesos contencioso debido a que el SAT les inicia procedimientos de ejecución coactivos para que en el más breve plazo quitarles sus bienes con medidas cautelares a fin de obtener una ventaja sobre el administrado.

A todo esto la Defensoría del Pueblo en el informe del 2010: Señala que las municipalidades distritales “no pueden poner en trámite un procedimiento de cobranza coactiva en tanto el administrado haya formulado un descargo ante la administración o un aqueja o un recurso administrativo. Por tanto es responsabilidad que los funcionarios contemplen el Derecho de defensa de los administrados mediante el cumplimiento de los plazos de reclamación o de apelación, antes de iniciar acciones de cobranza coactiva” (párr 11).

“los ciudadanos no conocen como amparar el derecho de defensa o no conocen como impugnar una resolución administrativa, las cuales nunca han sido notificadas en sus domicilios, muchos de ellos hacen uso de su derecho de defensa y no eligen por demostrar impugnaciones contra las resoluciones de determinación, las cuales en muchas ocasiones no son notificadas en sus viviendas con cargo de recepción” (párr 12).

También lo señala la sentencia del tribunal constitucional:

Ahora bien esta potestad que tiene la administración pública de sancionar por la sola presunción, la cual hace un aparente principio de legalidad, pero que en la realidad vulnera la tutela jurisdiccional del administrado, quienes ven amenazados sus derechos, los cuales son protegidos por la Constitución Política (2006, párr..19).

Por otro lado respecto al marco conceptual de esta tesis, vamos a iniciar desarrollando el acto de notificar, y vamos a describirlo como la función de carácter obligacional de la administración pública y del estado dentro de un proceso de litis, el cual tiene como efecto garantizar el derecho de defensa de las personas.

Es así, como ya lo hemos estado mencionando el artículo 18 del TUO la ley 27444, la cual obliga a que sea la administración pública la encargada de notificar los actos administrativos, esto es que también tengan una debida diligencia de los actos, los cuales garantizaran el debido procedimiento.

El acto de notificar no nace en el derecho contemporáneo sino que ya en Roma se tenía una idea, no un tanto clara por supuesto, de cómo se debía llevar a la otra parte al un proceso y ante juicio, es así que:

Para Moutón y Ocampo,...En Roma existía el *In Jus Vocatio* que en otras palabras era el llamado a juicio, el cual consistía en que el demandante llamaba a viva voz al demandado para que este pueda comparecer ante el juez, este acto de notificar se hacía a plena vía pública, en este sentido no era solo el encargado de notificar a la otra parte sino de llevarlo si era posible a la fuerza. Marco Aurelio, lo sustituyó por la *Litis Denuntiatio* y el *Edictio Actionis* y Consistía en la convocatoria que hacía el actor, por escrito con testigos, pero siempre en forma privada (1926, pp.1833).

Entonces bajo estos conceptos del Derecho Romano podemos darnos cuenta que “el acto de notificar consistía en la presentación de las partes ante el tribunal, que hoy en día sería en equivalencia la diligencia judicial a la que asistirían las partes por igual, uno a acusar y el otro a defenderse de las acusaciones, pero como ya lo dicen Moutón y Ocampo, nada de esto sería posible sin el llamamiento expreso del actor o demandante” (1926, pp.1833).

“En este sentido y más adelante fue “Constantino quien hizo intervenir al los funcionarios públicos en la citación y eliminó a los testigos” (...). (Moutón y Ocampo. 1926, pp.1834).

“En la actualidad, la notificación la formalizan siempre los funcionarios públicos. En algunos países funcionarios de los juzgados o tribunales”. (Piratova, A. 2013 p. 484).

Para entender mejor analizaremos el artículo 18 del TUO de la ley 27444, que en sus numerales primero y segundo señala de esta manera:

Artículo 18.1.- La notificación del acto será practicada de oficio y su debido diligenciamiento será competencia de la entidad que lo dicto.

Como podemos entender del numeral 1 del artículo 18 del TUO de la ley 27444, la cual nos dice claramente que el acto de notificar será solo y exclusivo de la administración pública de la cual provenga.

En este sentido la administración pública será la responsable directa de iniciar un procedimiento en la cual se garanticen los derechos del administrado, puesto que de su órgano de función será el encargado de emitir los actos administrativo y será también este el obligado a hacer llegar dicho acto resolutive mediante la notificación a manos del administrado.

Si nos ponemos en el caso de que las notificaciones de los actos administrativos no se estuvieran cumpliendo, entonces, estaríamos vulnerando los derechos de las personas no solo en el procedimiento administrativo sino también en un probable proceso contencioso administrativo ya proyectándonos a un proceso en vía judicial, dado que para iniciar una demanda de nulidad de acto administrativo, necesariamente vamos a necesitar las pruebas que el acto administrativo o resolución de la administración notificó o diligenció de forma indebida, ¿y si no lo tenemos? Como lo probamos, ¿y si solo lo tiene la administración como bien notificada? Entonces como garantizamos que el Juez del proceso emita su pronunciamiento a nuestro favor.

En este sentido todo acto emanado de la administración pública debe de ser notificado a tiempo y con las formalidades que de la ley deriven, al referirnos a tiempo, la ley 27444 señala que la administración pública tendrá 5 días para hacer llegar dicho acto a manos del administrado luego de que este haya sido emitido por sus funcionarios dentro de sus obligaciones.

Al referirnos a las formalidades esta también está descrita en la ley en mención la cual expresa en el artículo 24 de la ley en mención y sus numerales subsiguientes que las formalidades seguidas de un acto administrativo para su correcta notificación serán las siguientes (para más información revisar el anexo número 01°).

Como hemos podido apreciar en este breve análisis del artículo 18 numeral 1, nos queda claro que es la administración pública es la encomendada por la ley a hacer que el debido procedimiento administrativo se lleve de acuerdo a la constitución y las leyes, respetando los principios fundamentales de esta norma.

Ahora al hablar del diligenciamiento, nos estamos refiriendo a la acción de carácter también obligacional que tiene la administración pública, puesto que es la entidad la responsable de hacer llegar a manos del administrado todos los

actos procedimentales que de ellas emanen, a tal sentido serán las administraciones del estado las que se encarguen de contratar personal idóneo que cumpla la función de mensajería y haga llegar a conocimiento del administrado todos los actos que le sea competentes.

Artículo 18.2 La notificación personal debe diligenciarse por la propia entidad por mensajería que ellos mismos contraten, los cuales tienen la obligación de registrar el diligenciamiento con un adecuado control y cumpliendo la normativa para este acto. En zonas alejadas, podrá disponerse se practique por intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del administrado.

Ya enfocándonos en el numeral 2° del artículo 18 del TUO de la ley 27444, podemos establecer dos supuestos.

El primero nos indica “La notificación personal podrá ser efectuada a través de la propia entidad, por servicio de mensajería especialmente contratado para el efecto”, en otras palabras, que la administración podrá notificar de un acto administrativo a la persona a través de personal calificado que trabaje para dicha entidad o contratar el apoyo de personal de una empresa encargada de llevar los mensajes al administrado para que este pueda cumplir y ejercer sus derechos y obligaciones ante la administración así también tenerse por bien notificado.

En este sentido, la ley en mención. Obliga y hace responsable a la administración pública de que todo acto emanado de sus funciones llegue a manos de la persona indicada por este, más no se pierda su derecho a la defensa, es el órgano administrativo el que garantice por medio de personal a cargo o de apoyo de personal de empresas responsables que hagan que todo administrado sea notificado a tiempo dentro del plazo establecido por la ley tratada.

Pienso que para tales fines las empresas encargadas de distribuir de forma oportuna no tendrán responsabilidad alguna en la entrega inmediata de el acto administrativo, pero si nos ponemos a analizar depende de estas de que las partes involucradas en la controversia administrativa puedan cumplir las obligaciones o derechos respectivos, mas esto no excluye de responsabilidad a la administración puesto que son ellos los encargados de buscar empresa responsables para dicho fin en último de los casos, puesto que ellos deberían de tener su propio notificador contratado en la entidad.

Ahora en el segundo supuesto, “en caso de zonas alejadas, podrá disponerse se practique por intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del administrado o la policía del sector.

En base a todos estos análisis del artículo 18 del TUO de la mencionada norma, podemos concluir que el SAT, no está cumpliendo con la ley 27444 o la cumple de forma defectuosa, haciendo caer en error al administrado, hechos que lo vamos a comprobar con esta tesis. (El análisis del artículo 18 del TUO es nuestro, 2016).

“Al conocer de los derechos del administrado deben partirse de los derechos registrados por nuestra Constitución, que son validos ante la administración [...] en sus relaciones con la administración pública, los administrados tienen los siguientes derechos. A ser informado del estado en que se están llevando sus procedimientos y obtener copias de documentos contenidos en ellos” (Reina, 2007.p104).

Para poder entender los antecedentes del derecho administrativo y su doctrina en los diferentes países de Europa daremos una breve pronunciación al respecto. Podemos empezar por el derecho administrativo en Alemania, “(...) nace alejado del derecho administrativo francés, puesto que este no nace de una crisis en un estado, sino que se origina de una lenta trasformación en sus territorios. Los alemanes fueron superando progresivamente criterios jurídicos

los cuales iban evolucionando según el paso de los años, de esta manera dejaban atrás sus concepciones erradas del derecho administrativo” (Batista, Caracas J, Hernández L, Guzmán S, Machin A, Salazar H, junio de 2008. p.126).

Otto Mayer define, “el derecho administrativo se entiende como la que es ejercida por la autoridad pública y tiene como finalidad hacer que el ciudadano conozca lo que debe de hacer para defenderse y a que está obligado. Dentro de las referencias del derecho administrativo y del acto administrativo podemos decir que en los estados pre constitucionales las normas que reglamentaban el derecho administrativo serian siempre normas internas del Estado. Era el monarca que de forma drástica y general las que las dictaba y eran favorables para él y obligatoria para sus órganos, por esto estas normas no eran garantías para los ciudadanos” (Batista, Caracas J, Hernández L, Guzmán S, Machín A, Salazar H, junio de 2008. P127, 128),

Solo nos queda de manera puntual señalar claramente los principales derechos del administrado adquiridos de la misma ley para que todos conozcamos nuestros derechos y podamos defendernos en base a estos entre los cuales tenemos; el derecho a ser informado del procedimiento en cualquier estado de este, a ser informado mediante actos de notificación personal, debidamente diligenciados dentro del plazo establecido entre otros, (para más información revisar el anexo número 02).

Podemos entender como indebida notificación de los actos administrativos a aquellos actos emanados de la administración pública y que no fueron enviados con efectividad ante el administrado, o también, los actos que son omitidos por problemas dentro de la administración pública, el cual perjudicaría al procedimiento y al derecho de defensa del administrado.

Ahora bien, Galindo (2006), nos señala sobre la indebida notificación de las resoluciones demandadas, “fue vulnerado su derecho de defensa, no pudiendo hacer uso de los recursos en la vía administrativa impidiendo que un Juez, de lo Contencioso Administrativo pueda hacer un justo análisis de problema, con la observación de las pruebas alegadas por los administrados en esa vía administrativa, de tal forma que impide que el juez dicte un veredicto definitivo según el proceso” (p.332). No pudiendo emitir un pronunciamiento razonable por el indebido diligenciamiento al no demostrar con pruebas contundentes la inobservancia de la administración pública.

(el subrayado es nuestro).

“El acto administrativo como expresión directa del derecho público deviene del sistema jurídico imponente donde los monarcas obligaban a renunciar a los súbditos a realizar oposición ante las autoridades. Por otro lado señala la doctrina nacional el acto administrativo se especifica como una expresión de voluntad emanada de los órganos superiores y con relevancia jurídica en los entes del Estado en ejercicio de una administración justa” (Noción del Acto Administrativo, 2008, párr. 1, 2).

“cuando el acto administrativo se ha terminado por vía administrativa es necesario solicitar la justicia vía contenciosa administrativa, este recurso debe ser presentado ante el juez y debe de estar enmarcado en el principio de legalidad” (Cubillas, Martínez, Rivas, 2008, párr. 3).

Dentro de nuestra posible demanda de nulidad de acto administrativo ante el contencioso administrativo es necesario presentar como prueba que dicho acto administrativo no ha sido debidamente notificado y si es posible de tenerlo debemos de demostrar que carecen de algunos de sus elementos de validez tal y como lo menciona estos autores.

“Los elementos de validez del acto administrativo, La competencia, la voluntad, el contenido, los motivos, la finalidad y las formalidades” (Cubillas, Martínez, Rivas, 2008, párr. 1,2).

La finalidad del procedimiento administrativo y la emisión de los actos se dan con la única convicción de que estos actos generen derechos y obligaciones con efectos jurídicos. Ahora, si bien es necesario tener claro los requisitos de validez del acto administrativo, también es necesario conocer cuáles son las causales de nulidad, es por esto que debemos señalar los supuestos que encontramos en el artículo diez de la norma debatida, los cuales señalan como vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes (para más información ver el anexo número 03).

Así también en el artículo once expresamente señala cual es la instancia competente para declarar la nulidad, como es el caso del superior jerárquico de quien se dictó el acto, en caso de que no tenga un superior jerárquico la nulidad se declarara por la misma autoridad que dictó el acto primigenio.

Podemos decir, que de lo ya estudiado se nos hace fácil deducir que el administrado a primera instancia, ósea, desde el primer acto administrativo ya obtiene derechos que son tutelados por el estado, derechos que son expresados y comprendidos de mejor forma en los principios que rigen el derecho administrativo.

El procedimiento administrativo se inicia de dos maneras, por aprobación automática o por evaluación previa, de estas dos formas los administrados comienzan en principio una relación meramente administrativa con la entidad, pero que no escapa del supuesto que a cabo de un tiempo esta se convierta en una relación jurídica.

Los administrados inician el procedimiento solicitando sus trámites a la entidad pública y estas a su vez las reciben y evalúan en relación al TUPA institucional,

es aquí donde se establece la relación con la administración, y los procedimientos pueden ser de dos formas.

Uno de ellos es el procedimiento de aprobación automática, en este procedimiento las solicitudes se consideran aprobadas de forma inmediata siempre que hayan cumplido los requisitos establecidos por la entidad pública. En este procedimiento no hay una respuesta expresa por parte de la entidad pública, pero esto no impide la autorización solicitada y una fiscalización posterior.

El segundo caso se considera de evaluación previa, puesto que la entidad no se pronuncia al respecto en el debido momento y es entonces donde se aplica el silencio administrativo positivo y negativo. Es necesario señalar que las entidades administrativas están reguladas por el TUO de la Ley 27444, y por el Decreto Legislativo 1029.

“De forma similar debemos señalar que en el artículo V del título preliminar de la ley 27444, como fuentes del procedimiento administrativo a las disposiciones constitucionales entre ellas el inciso 8 del artículo 139 de la constitución política del Perú, la cual expresamente señala que el estado no debe de dejar administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. La función del estado como tal, es cumplir y hacer cumplir la constitución, además de encaminar todos sus esfuerzos en la búsqueda del bien común; para cumplir con esta finalidad, el estado se establece bajo el concepto de Administración Pública. Dicho con otras palabras la administración pública es la encargada de recolectar, manejar y vigilar los recursos del erario público, recolectar el dinero de las contribuciones y busca darle el uso posible” (Análisis jurídico del procedimiento administrativo de ejecución, 2003. P.17).

Ahora es necesario saber cuáles son los principios que inspiran el procedimiento administrativo, para esto es necesario basarnos en la ley de procedimiento administrativo general, es así que para nuestra opinión

mencionaremos los más importantes para un correcto procedimiento administrativo.

“El procedimiento administrativo, viene a ser como un conjunto ordenado de trámites formalmente realizadas, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la administración” (et facto, 2015, p.8).

El procedimiento administrativo Consiste en una serie de pasos que permitirán que los ciudadanos puedan sentirse al amparo de la ley de su país y ante cualquier duda puedan reclamar al organismo del Estado (Definición de procedimiento administrativo, 2008, párr.1)

Para entender mejor el procedimiento administrativo es necesario enfocarnos en los principios del procedimiento administrativo, ya que el procedimiento administrativo se sustenta principalmente en estos. Estos principios son importantes para un correcto procedimiento administrativo, y a la vez sirve de garantía para el administrado en relación al derecho de defensa.

De este modo también lo señala el Tribunal Constitucional en sentencia de Exp. N.º 03891-2011-PA/TC: argumentos 12, 13, 14.

El Derecho al Debido Proceso previsto por el artículo 139.3º de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos.

“El derecho de defensa consiste en la obligación de ser oído, asistido por un abogado, o en su defecto a contar con uno de oficio (...). El derecho de defensa debe de atribuírsele incluso a un justiciable así este haya hecho uso

indebido de la ley o este en una acción antijurídica, por lo tanto siempre debe de ser oído y formular su defensa, no solo por las garantías constitucionales sino también por tratarse de un ser humano con derechos inherentes a este, en todas las etapas del proceso” (Hernández, 2008, párr.11, 12).

De esta forma y a manera de conclusión, Cesar Landa, expone en el portal de información y opinión legal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el artículo de derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, lo siguiente: “El derecho de defensa es un atributo esencial del debido proceso, y cualquier impedimento de un ciudadano a un proceso judicial es una vulneración a la Constitución Política del Perú, incluso si esta limitación se basa en la ley, incluso en un proceso de ejecución o hasta en la vía administrativa” (Landa, 2002, p. 10).

Legislación comparada.

Venezuela.

Procede en reemplazo de la notificación personal y consiste en que el secretario debe fijar en el domicilio del notificado un cartel emplazándolo para que ocurra a darse por citado en el término de quince días y otro cartel igual debe publicarse por medio de la prensa, a costa del interesado, en dos diarios que determine el tribunal entre los de mayor circulación de la localidad, con intervalo de tres días entre uno y otro.

Chile.

Definición de Notificación proporcionada por Roberto Alfredo González Maldonado: Es un acto jurídico procesal por el cual se da conocimiento legal a la parte afectada, que se ha deducido una acción judicial en su contra o que se

ha dictado una resolución judicial, para que actúe procesalmente en el juicio mediante los actos que la ley pone a su disposición. Es además, un acto de certeza judicial, porque desde su fecha empiezan a correr los plazos que la ley le confiere para que la parte, ejerza los derechos conferidos por la ley. La primera de todas las notificaciones y aquella que notifica una resolución muy importante o la sentencia, la practica un ministro de fe, llamado receptor judicial. En la primera notificación, Ud. sabe desde que tribunal tiene su causa, pasando por el rol asignado, la fecha de ingreso, la materia de que se trata, la cuantía, el nombre de su contraparte, el procedimiento de que se trata y lo que le piden al tribunal que declare en su contra. Se lleva a cabo, entregándole copia de la demanda y de lo que el juez resolvió sobre ella y debe llevar además, la fecha en que se practica la notificación el nombre y firma del receptor. Si al notificado, no se le encuentra, la ley faculta notificarlo por cédula, lo que es exactamente igual que lo anterior, pero con un trámite previo ante el tribunal y la constancia de haberlo buscado dos días en su domicilio y dejando constancia que se encuentra en el lugar del juicio y que donde se le notifica es su morada o domicilio. En ese caso, se le deja la cédula con el contenido de la demanda, por cualquier medio: sea por debajo de la puerta, tirada al jardín, pegada con goma en una puerta o entregándosela a cualquier persona adulta que se encuentre en el recinto.

Colombia.

La notificación personal es aquella que consiste en entregar a la persona a quien se debe notificar, en forma personal, copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído, cuando sea escrita (artículo 40 del C.P.C.)

Es el acto por el cual se notifica al demandado con la demanda. Emplazar significa conceder un plazo para la realización de determinada actividad procesal.

1. Cuando la parte interesada en una notificación personal manifieste que ignora la habitación y el lugar de trabajo de quien debe ser notificado.

2. Cuando la parte interesada en una notificación personal manifieste que quien debe ser notificado se encuentra ausente y no se conoce su paradero.
3. En los casos del numeral 4 del artículo 315.

Formulación del problema de investigación.

Para empezar con la investigación lo más importante es formular el problema de manera más exacta con la finalidad de buscar soluciones al planteamiento del problema. Según Tamayo (2004): “La formulación correcta del problema permitirá obtener nuestras posibles soluciones, mediante la aplicación de una correcta investigación”. (p. 95).

En tal sentido formulamos los siguientes problemas de investigación de esta tesis, la cual va consistir en mencionar lo sucedido en la realidad respecto del mal diligenciamiento que está teniendo el SAT de Lima en relación a las notificaciones y la vulneración del artículo 18 del TUO de la ley 27444.

Problema general.

¿De qué manera la inobservancia del artículo 18° del Texto Único Ordenado de la ley 27444 de parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima, guarda relación con los derechos del administrado el año 2016?

Problema específico 1.

¿Cómo el Servicio de Administración Tributaria de Lima en incumplimiento del artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, viene afectando el debido procedimiento administrativo?

Problema específico 2.

¿En qué medida el incumplimiento de los plazos de notificación por parte del Servicio de Administración Tributaria podría afectar el derecho a la defensa del administrado?

Justificación del estudio.

Con esta investigación se pretende dar a conocer la problemática que se está produciendo hoy en día entre el Servicio de Administración Tributaria hacia los administrados, problemática que está causando pérdidas económicas al administrado por una mala actuación administrativa.

En este sentido queremos dar a conocer a las personas, en este caso al administrado, sus derechos y obligaciones el cual es protegido por el Estado y que viene siendo vulnerado por este Organismo de la Municipalidad de Lima.

Con el resultado de esta investigación queremos poner en conocimiento la tutela que el Estado está obligado a brindarle al administrado, tutela que se encuentra suscrita en la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, pero que el Servicio de Administración Tributaria de Lima incumple causando como ya lo mencionamos pérdidas irreparables al administrado.

Por lo ya mencionado podemos identificar nuestra justificación con lo señalado por el Tribunal Constitucional en el (Exp. N.º 01709-2011-PA/TC).

“Los actos administrativos deberán de cumplir la debida notificación, con la finalidad que el administrado conozca el contenido de dichas resoluciones, más aún cuando se le han aplicado sanciones, si esto no ocurriera se estaría vulnerando el derecho de defensa”.

En este sentido el tribunal menciona claramente la problemática de nuestra investigación por lo que podemos justificarlo de esta manera.

“En el caso de autos no se aprecia la notificación al obligado de acuerdo a lo establecido por ley, y este Tribunal ya ha determinado que la vía del amparo

resulta ser la idónea para la dilucidación de controversias como la de autos, en la cual se alega la falta de notificación de una multa”. (Vergara, Gotelli. 2011).

Para poder llegar a una investigación más certera nos vamos a valer de datos confiables tanto de administrados como de funcionarios y de esta forma llegar a contrastar las distintas opiniones las cuales nos servirán para encontrar las posibles soluciones a nuestro problema de investigación.

Al respecto me parece importante que el SAT de Lima, tendría la obligación de innovar un método de notificación personalizado, el cual consistiría en abrir un pagina de notificaciones personal, tipo casilla electrónica para cada administrado que inicie un procedimiento administrativo, esto con la finalidad que el administrado pueda amparar sus reclamos de forma automática, ante la administración pública.

Objetivos.

Los objetivos son las tareas que el investigador se impone para demostrar las hipótesis. Gómez, M. (2006) manifiesta que los objetivos generales indican cuales son los conocimientos que se obtendrán al haber finalizado el estudio. Este objetivo expresa el resultado del conocimiento más complejo que se desea alcanzar. Así mismo indica que los objetivos específicos son más concretos y por lo general indican conocimientos de menor complejidad que se irán obteniendo durante el estudio. (p.23).

Objetivo general.

Demostrar que la inobservancia del artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 por parte del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, afecta los derechos del administrado 2016.

Objetivo específico 1.

Comprobar si el Servicio de Administración Tributaria de Lima está cumpliendo de forma correcta el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444, o está afectando al debido procedimiento administrativo.

Objetivo específico 2.

Determinar de qué manera el incumplimiento de los plazos de notificación afecta el derecho de defensa del administrado.

Supuestos jurídicos.

Para entender el concepto de hipótesis es pertinente citar a Vara A (2012), quien manifiesta que las hipótesis:

[...] son explicaciones tentativas a las preguntas de investigación. Así mismo indica que son oraciones afirmativas que responden a los objetivos y preguntas, en este caso las hipótesis proponen tentativamente las respuestas a la preguntas del problema de investigación (p.159).

Supuestos general.

Si el Servicio de Administración Tributaria de Lima no cumple el artículo 18° del Texto Único Ordenado de la ley 27444, entonces esta inobservancia está afectando el derecho del administrado el año 2016.

Supuestos específico 1.

Si el Servicio de Administración Tributaria de Lima no está cumpliendo de forma correcta el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444, entonces está afectando un debido procedimiento administrativo.

Supuestos específico 2.

Si hay incumplimiento en los plazos de notificación, entonces se está afectando el derecho de defensa del administrado.

II. METODOLOGÍA.

2.1. Tipo de investigación.

La investigación es un procedimiento sistemático, crítico, reflexivo y controlado que le da al investigador la posibilidad de descubrir nuevos datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del conocimiento.

Landeau, (2007), “En nuestra investigación emplearemos el tipo de **investigación descriptiva**, esto es debido a que; comprende la descripción, registro, análisis de la interpretación de la naturaleza actual, y la composición o los procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre como una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos y su característica fundamental es la de presentarnos una investigación correcta” (p.46).

2.2. Diseño de investigación.

El diseño de investigación viene a ser el método de recolección de información necesario para responder a las preguntas de investigación bien sea (cuantitativa o cualitativa), esto es que el investigador deberá de escoger un diseño de investigación practico y preciso para cumplir el objetivo de su estudio, en por ello que el diseño de investigación muestra los procedimientos a seguir para lograr dichos objetivos, es por ello que previo al diseño de investigación se tenga muy en claro los objetivos que se desea alcanzar.

La presente investigación es de enfoque cualitativo de tipo básico; por cuanto está orientado a adquirir conocimientos fundamentales en relación a la debida diligencia que debe de tener el Servicio de Administración Tributaria con respecto a los actos de notificación de las resoluciones administrativas, en el marco a la protección de los derechos del administrado. Así mismo conocer la realidad mediante la recopilación de datos, análisis y sistematización de

información mediante las encuestas realizadas para medir las percepciones de las personas con respecto al mal diligenciamiento de las notificaciones.

Tal como sostiene Hernández (2014). “La investigación cualitativa se orienta a entender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (p.364)

En el presente trabajo vamos a emplear diseño de investigación fundamentada y No-experimental.

2.2.1.- investigación fundamentada. La siguiente investigación presenta el diseño de investigación Fundamentada, la cual se hace efectiva debido a que trata de la investigación que mientras se va recaudando datos, estos van siendo examinados, de manera que así, estas se seleccionen para luego ser analizadas, lo recaudado, en el trayecto de la investigación

Glaser (1992) nos dice que la teoría fundamentada para investigaciones que conciernen temas relacionados como la conducta humana en diferentes ámbitos tales como organizaciones o grupos sociales, esta teoría es muy útil.

Su alcance es Explicativo ya que se dirige a una comprensión de un conflicto o fenómeno. Además, que quien realiza este tipo de investigación debe tener buen análisis, síntesis e interpretación.

2.2.2.- No Experimental. Esta investigación es No Experimental toda vez que describe variables y las relaciones que se dan de forma natural entre las mismas” (Sousa, Driessnack y Costa, 2007, p.3). Así mismo tiene como propósito determinar la inobservancia del artículo 18 del TUO de la ley N° 27444 en el Servicio de Administración Tributaria de Lima-2016.

2.3.- Caracterización de Sujetos.

En la presente investigación se ha tenido a bien definir involucrar a funcionarios del Servicio de Administración Tributaria de Lima, Magistrados y/o abogados especialistas en materia de derecho administrativo, Gerente de la Federación Nacional de Taxistas, Jefe de la Defensoría del Pueblo de Lima Norte; Sub gerente del área de Coactivo de la Municipalidad de Lima. Toda vez que en razón de su especialidad están vinculados al objeto de estudio en la presente investigación.

SUJETOS DE LA ENTREVISTA		
ENTREVISTADO	TRAYECTORIA	ENTIDAD Y CARGO
Javier Abdón Cornejo Pereyra.	Abogado con amplia experiencia en derecho administrativo.	Municipalidad de Carabayllo. Procurador Público.
Yda Paola Pacheco Portal	Abogada con experiencia en trámites administrativos por deudas no tributarias en procedimientos contra el SAT de Lima.	Abogada de la Federación Nacional de Taxistas
Lucia Gabriela Magan Montes	Abogado con experiencia en derecho administrativo y derechos humanos.	Jueza del segundo Civil Transitorio de Lima Norte
Julio Manuel Arbi Ospino	Abogado especialista en Derecho Tributario	Estudio de Abogados Arbi & Asociados
Fidel Cantera Melgarejo	Abogado especialista en Derecho Administrativo.	Municipalidad de Lima

Fuente: elaboración propia. Lima, 2017.

2.4 Población y muestra.

Para efectos de llevar a cabo la presente investigación se realiza en las el Servicio de Administración Tributaria de Lima, ubicado en jr. Camana 301, con la finalidad que mediante las entrevistas realizadas a los expertos se podía determinar una medida importante e relación la vulneración de los actos de notificación en contra de los administrados.

Nuestra población consistirá en el innumerables casos que se van a presentar dentro de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria de Lima, y mi muestra está contemplada por los expertos que voy a entrevistar, entre ellos funcionarios del SAT.

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Técnicas. Son procedimientos para obtener la información necesaria para logra un determinado objetivo de una investigación científica. Se refiere a como se va obtener los datos, están relacionados con la Operacionalizacion que se realiza a las variables, se recurre a esta técnica para obtener la más amplia información en el estudio.

Para desarrollar la siguiente investigación se ha utilizado las siguientes técnicas científicas:

- **Técnica bibliográfica.** Se ha utilizado para recopilar información escrita de libros, jurisprudencias, casaciones, revistas, folletos y a través de medios tecnológicos con el internet.
- **Observación.** Para observar o captar en el lugar de los hechos el problema de estudio en la presente investigación.

- **Análisis Jurisprudencial.** En la cual procederemos a realizar un análisis intenso que permita que el lector pueda tomar una posición clara del problema a tratar, mediante una jurisprudencia del tribunal constitucional que esté relacionada con nuestra problemática.
- **La Entrevista.** es la técnica personalizada en la que se formulan preguntas directas y abiertas a un experto en la materia. Como sostiene Tamayo (como se citó en Rojas, 2015) “[...] es aquella que “se realiza en forma oral tal y como lo diseña el investigador” (p, 47).

El precitado autor sostiene:

[...] tanto la entrevista como la encuesta nacen de la premisa de que si el investigador desea conocer la forma de pensar o el comportamiento de un determinado grupo de personas, para lo cual la mejor manera de obtener ese conocimiento es preguntando directamente a ellas, que es propio del enfoque o diseño fenomenológico de una investigación (*Ibídem*).

En la presente investigación se empleará la técnica de la entrevista y el análisis jurisprudencial, para la recolección de datos, el mismo que sirvió para el análisis o medición de la percepción de las personas que tienen algún procedimiento administrativo ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima, en relación a la vulneración de sus derechos a consecuencia de la indebida notificación y trasgresión al artículo 18º de la ley 27444.

2.5.1. Instrumentos de recolección de datos.

Ficha de entrevista. El instrumento empleado para la recolección de datos fue a través de una ficha de entrevista elaborada de forma ordenada en atención a los objetivos de la investigación, con preguntas abiertas de modo tal que se garantizó la absoluta libertad del entrevistado al momento de la entrevista.

2.5.2.-Validez y confiabilidad de los instrumentos.

- **Validez del instrumento:** la validez del instrumento se realizó a través de juicio de expertos, los cuales evaluaron cada uno de los Ítems presentados, como parte del cuestionario diseñado.
- **Confiabilidad.** la confiabilidad de los instrumentos se respalda en su originalidad en su elaboración y la respectiva aprobación de la ficha de validación de los instrumentos sometidos a juicio de expertos.

2.6.- Métodos de análisis de datos.

Sin dejar de resaltar la importancia de la presente investigación, el método de análisis de datos se llevó a través del empleo de las técnicas e instrumentos de recolección de datos identificados y listados en el apartado anterior; parametrado siempre bajo el enfoque de una investigación cualitativa, de tipo básica, de diseño fenomenológico y no experimental elaborando y aplicando las respectivas herramientas e instrumentos de recolección de datos con el objeto de recopilar la información suficiente acerca del fenómeno materia de estudio, asimismo diversas posturas y perspectivas acerca del problema inicialmente planteado, en atención a los objetivos fijados en la presente investigación, y finalmente alzamos a contrastar nuestros supuestos jurídicos, habiendo analizado y discutido previamente la información recopilada.

El método es la estrategia que se plantea en el trabajo para desarrollarlo en base a los datos de análisis, por lo cual la presente investigación calza en el método deductivo que vendría ser la investigación que va de lo general a lo particular, debido ello, cumple con mi presente investigación que va de la teoría a la experiencia. El método Dogmático tiene un carácter jurídico, y su problemática referente a un conflicto jurídico desde una percepción únicamente formalista, y su finalidad básica sería una interpretación del derecho objetivo.

2.7.- tratamientos de la información: unidades temáticas, categorización.

UNIDADES TEMÁTICAS	CATEGORIZACIÓN
El mal diligenciamiento del acto de notificación.	Descripción del el mal diligenciamiento de el acto de notificación
Derecho del administrado	Conceptos básicos del Derecho del administrado
Debido Procedimiento administrativo	Concepto del procedimiento administrativo
Los plazos de notificación	Definición de los plazos de notificación
El derecho de defensa	Definición del derecho de defensa

2.8.- Aspectos éticos.

En nuestra presente investigación estamos tratando de respetar todos los derechos protegidos por los autores citados, los cuales han sido debidamente referenciados con su nombre, año de publicación, editorial, país y número de páginas. De igual manera se está protegiendo la identidad de las personas que han podido contribuir en este trabajo de investigación, debido a que es estrictamente académico. Por otro lado se toma en cuenta el manual APA y el reglamento de investigación de la Universidad Cesar Vallejo. Por lo tanto este trabajo de investigación es cien por ciento confiable, revestido de credibilidad, transparencia y originalidad, en pos del total cumplimiento de los parámetros que exige el método científico.

III. RESULTADOS.

3.1. Descripción de Resultados de la Técnica de Entrevista.

Los resultados obtenidos de las entrevistas respecto del Objetivo General, el mismo que responde a demostrar que la inobservancia del artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 por parte del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, afecta los derechos del administrado 2016; son los siguientes.

Magan, Arbi, Cornejo, Canteras y Pacheco (2017) sostienen que la notificación de los actos administrativos son importantes puesto que con estos se hacen conocer las resoluciones emitidas por la administración pública, las cuales deberán de cumplir con sus requisitos formales a efecto de que cumplan su finalidad que es hacer conocer un acto administrativo al administrado para que este pueda proceder de conformidad a su derecho en refutar o en admitir dicho pronunciamiento. Así también coinciden que el diligenciamiento de la de notificación la cual se encuentra contemplado en el artículo 18 de la ley 27444 y modificado por el Decreto Legislativo 1272, es el acto por el cual el Servicio de Administración tributaria de lima y toda la administración pública deben de realizar dentro de los plazos establecidos por la ley, en dicho diligenciamiento el notificador deberá de constar que el acto administrativo ha cumplido su finalidad siendo entregado a manos del administrado o en su defecto deberá de dejar constancia que si se llegó al domicilio y que no se encontró en el al interesado, en este caso, deberá de tomar fotografías del domicilio señalar las características y tener por firmado el acta con dos testigos que hayan presenciado dicho diligenciamiento. Ahora con respecto al debido diligenciamiento que ofrece el Servicio de Administración Tributaria como garantía de los derechos del administrado, tenemos que Arbi, Cornejo, Pacheco y Melgarejo coinciden en que el Servicio de Administración Tributaria de Lima no cumple el diligenciamiento adecuado de las resoluciones administrativas y que este incumplimiento vulnera el derecho del

administrado, por cuanto consideran que el SAT actúa como demandante, como notificador y el que notifica es casi siempre un subordinado de este organismo descentralizado de la municipalidad precisando que a forma intencional los notificadores no cumplen con realizar la diligencia y el SAT las considera como bien notificadas, trasgrediendo así el derecho expuesto. A esto consideran también que el Servicio de Administración Tributaria de Lima debería de contratar notificadores de una empresa de currier a fin de terminar con esta mala práctica.

Por otro lado de acuerdo a las notificaciones realizadas en domicilio distinto al administrado los expertos han llegado a la conclusión que dichas notificaciones son susceptibles de ser declaradas nulas al no cumplir su finalidad, la cual es dar a conocer una resolución de la administración pública a manos del administrado o interesado. Dichas notificaciones están contempladas en el artículo 21 de la ley 27444, la cual exige al notificador que dicho acto administrativo deberá de ser entregado en el domicilio señalado por el administrado en su expediente, si este no determinara domicilio se notificará en el que conste en su documento nacional de identidad, así también manifiesta que se solicitara la firma y el nombre de la persona a la cual se está notificando, indicando la fecha de la diligencia, si esta se negara a firmar se dejara constancia en el acta, si en el caso de no se encontrase en el domicilio se dejara constancia de dicho diligenciamiento y se procederá a anunciar fecha de retorno señalando, de no encontrarse por segunda vez en el domicilio al administrado este dejara la notificación por debajo de la puerta, cuyo procedimiento hará constancia en el acta de notificación y esta a su vez será anexada al expediente principal.

Sin embargo Magan (2017) sostiene que no pudo realizar una opinión objetiva hacia el Servicio de Administración Tributaria de Lima, puesto que considera que toda la administración pública en general incumple el

diligenciamiento de las notificaciones y muchas de ellas realizan notificaciones defectuosas, pero considera que este es un problema de los funcionarios que tardan demasiado en emitir dichas resoluciones o actos administrativos por cuanto la administración en si es demasiado lento en el Perú y esto se debe a la gran carga laboral que tiene todas las entidades públicas en el Perú, pero también considera de que la administración pública está haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder corregir estos contratiempos y así no afectar los derechos del administrado.

Por las consideraciones expuestas y los resultados que nos han emitido nuestros entrevistados, hemos podido comprobar que la tesis planteada con respecto a mi objetivo general tiene coincidencia, puesto que podemos determinar que nuestro problema de tesis es reconocido en cuanto respecta al plazo de notificaciones y su indebido diligenciamiento por parte del SAT los expertos también llegan a la conclusión que se está vulnerado el derecho del administrado, al no realizarse correctamente el diligenciamiento de la notificación y más aún no notificarse de forma correcta el acto resolutivo.

Por otro lado los resultados obtenidos de la entrevista de acuerdo al primer objetivo específico concerniente a “comprobar si el Servicio de Administración Tributaria de Lima está cumpliendo de forma correcta el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 o este está afectando al debido procedimiento administrativo”. Nos manifiestan que:

Magan, Arbi, Cornejo, Canteras y Pacheco (2017) sostienen que la notificación mal diligenciada no solo afecta el debido procedimiento administrativo, sino también afecta el derecho de petición del administrado así como el derecho de defensa consagrado en la Constitución Política del Perú, los expertos señalaron que el diligenciamiento de las notificaciones no solo es una obligación del

Servicio de Administración Tributaria Lima, sino también de toda la administración pública y que este incumplimiento afecta el debido procedimiento administrativo, así también manifiestan que existe Jurisprudencias del Tribunal Constitucional el cual enmarca debido proceso artículo 139 inciso 03 de la Constitución Política de Perú, declara que las garantías del debido proceso también deberán de ser consideradas en la vía administrativa, por lo tanto toda inobservancia del procedimiento en la vía administrativa deberá de ser comprendida como una vulneración al debido procedimiento administrativo, más aún si este tiene que ver con el acto de notificar que es sumamente importante, puesto que es la manera de hacer llegar a conocer una resolución al administrado, a efectos que este pueda formular lo que le conviene de acurdo a su derecho.

Los expertos han señalando diferentes respuestas con relación a que si conocen algún organismo del estado que pueda sancionar al Servicio de Administración Tributaria de Lima por no diligenciar correctamente los actos administrativos por medio de la notificación, haciendo que el debido procedimiento administrativo sea afectado por este.

Al respecto Cornejo, Pacheco y Melgarejo (2117) han señalado que; los administrado al sentir vulnerando cualquier derecho por parte del Servicio de Administración Tributaria podrían interponer una queja ante la misma entidad y denunciarlo ante la oficina de la defensoría contribuyente del administrado, dicha oficina es la encargada de recibir los reclamos de los contribuyentes en sentido de las actuaciones del Servicio de Administración Tributaria en vías del debido procedimiento, del mismo modo ambos especialistas coinciden en que si el administrado siente que se le ha vulnerado su derecho al debido procedimiento administrativo, este puede formalizar su denuncia ante la Defensoría del Pueblo dado que este es un organismo que atiende todos los reclamos de los ciudadanos, pero como sabemos no pueden hacer

mucho puesto que sus facultades están limitadas a solo hacer el problema público mas no solucionarlo, así podemos determinar entonces que estos especialistas nos despejan la duda planteada, pero que a nuestro entender y relajando un análisis de la posible solución que el Servicio de Administración Tributaria plantea para sus administrados, nos queda una seria duda en lo mucho que pueden ayudar en cuanto al reclamo que puedan plantear los afectados, puesto que al ser una oficina que se encuentra a subordinación de la municipalidad y su organismo descentralizado SAT, es fácil concluir que su respuesta siempre será desfavorable en muchos de los reclamos, puesto que estos no se van a perjudicar entre ellos mismos, y nos plantea la pregunta ¿Qué esperanza entonces tiene el administrado que su reclamo ante la oficina de la defensoría del contribuyente del administrado progrese?.

Sin embargo Arbi (2017), a la pregunta planteado párrafo precedente, es también compartida por este especialista, puesto que señala que al Servicio de Administración Tributaria no existe quien lo sancione, ya que para regular sus malas actuaciones han creado una oficina de defensoría del administrado, que al final es un subordinado de la SAT, que así hayas denunciado una posible vulneración a tus derechos como administrado, esto no serviría de mucho puesto que hasta que te respondan, el tramite reclamado ya se encontraría en algún procedimiento de ejecución coactiva, los cuales ya harían perder los bienes del administrado y a fin de que esto no suceda el administrado decide dejar todo tramite que inicio y en otros casos pagar la multa a fin de que sus bienes no sean retenidos o embargados por el mal funcionamiento del bendito Servicio de Administración Tributaria de Lima.

La apreciación que hace este especialista no nos aleja de la realidad que viene suscitándose en Lima con respecto a los reclamos de los administrados ante el Servicio de Administración Tributaria, en este

sentido es claro entonces que la solución a los reclamos del administrado no es quejarse ante el mismo SAT, sino amparar el derecho ante el órgano jurisdiccional pertinente, por supuesto luego de haber agotado la vía administrativa previos recurso impugnatorio de apelación.

Por otro lado Magan (2017) con respecto a la pregunta de que si conoce algún órgano del Estado que sancione al Servicio de Administración Tributaria de Lima por no diligenciar correctamente la notificación al administrado, esa experta ha indicado que toda entidad pública del estado tiene una oficina de control institucional (OCI), quien es la encargada de regular las funciones de los funcionarios públicos, así como investigar si estos han cometido algún delito que perjudique a la institución pública en este caso al organismo descentralizado de la municipalidad de Lima, a su entender el administrado debería de hacer llegar su denuncia a este despacho a fin de velar la protección de su derecho vulnerado y denunciar al funcionario que ha cometido el delito de omisión de actos funcionales.

Por otro lado los resultados obtenidos de la entrevista de acuerdo al segundo objetivo específico concerniente a “determinar de qué manera el incumplimiento de los plazos de notificación por el Servicio de Administración Tributaria de Lima afecta el derecho de defensa del administrado”. Nos manifiestan que:

Cornejo, Arbi, Pacheco, Margan, Melgarejo (2017) todos mis entrevistados expertos en la materia han indicado que el Servicio de Administración Tributaria de Lima incumple los plazos de notificación y que esto se debe al mal diligenciamiento que los trabajadores o notificadores de este organismo descentralizado de la municipalidad de Lima vienen realizando, más aún si estos no tienen una fiscalización adecuada, los expertos indican que el SAT debería de dejar de creer en la simple afirmación del notificador quien por el hecho de decir que se

encuentra el administrado bien notificado, estos ya lo creen como ciertos, costumbre que según mis entrevistados debería de dejar de practicar, así también manifiestan que el incumplimiento de los plazos de notificación perjudicaría al administrado en el sentido de que se le estaría privando de algún beneficio si fuera el caso, y estaría generando también una pérdida de algún bien por la inobservancia de la notificación dentro del plazo, en este sentido también manifiestan que el incumplimiento de la notificación por estar fuera de plazo estaría relacionado a un interés oscuro por parte de la administración pública, puesto que este buscaría que sea de esta manera para así apoderarse de los bienes del administrado.

Así mismo los entrevistados manifiestan que el incumplimiento en los plazos de notificación, si afectaría el derecho de defensa del administrado, puesto que como ya lo han mencionado el derecho de defensa contemplado en el artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política del Perú, consagra la garantía procesal que todo ciudadano debe de tener, y que en innumerables jurisprudencias se ha podido determinar que esta garantía planteada también deberá de ser interpretada en la vía administrativa. Hacen acotación que el derecho de defensa es por el cual el administrado puede formular oposición a algún trámite presentar pruebas o recursos administrativos, así como quejas y reclamos, en otras palabras a defenderse y que el incumplimiento de los plazo de notificación vulneraría este derecho tan importante en todo el procedimiento administrativo.

Por otro lado al preguntársele que otros derechos son vulnerados al no haberse notificado con el debido diligenciamiento de las notificaciones estos entrevistados han esclarecido que no solo se vulnera los derechos al debido procedimiento administrativo, el derecho de defensa, sino también otros derecho como son el derecho a la información, el derecho de igualdad ante la ley, el derecho de acción y así también se cometen

algunos delitos en los que encontramos el delito de omisión de funciones, abuso de autoridad, entre otros.

3.2. Análisis de fuente jurisprudencial.

Primer Análisis:

(Respecto a diligenciamiento de notificación dirigido a domicilio distinto)

❖ Identificación de la Providencia.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, Sentencia de Rev. Jud. N° 863-2012-Lima. Magistrados Ponentes: Acevedo Mena, Chumpitaz Rivera, Vinatea Medina, Yrivarren fallaque, Torres Vega. 02 de agosto del 2012.

❖ Hechos Relevantes.

En el caso de autos el actor pretende que se le revise la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva iniciado en su contra de conformidad con el artículo 23, numeral 23.5 de la ley 26979, por la imposición de la multa de tránsito hacia su vehículo como sustento de la demanda interpuesta. Precisa el actor que no ha sido notificado con los actos administrativos cuestionados, por el Servicio de Administración Tributaria de Lima, esto es la resolución de sanción y del inicio del procedimiento de ejecución coactiva, por lo que dicho procedimiento coactivo adolece de nulidad.

Por su parte el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima, sostiene en esencia que el procedimiento cuestionado se ha llevado en estricta observancia de las normas contenidas en la ley 26979 y sus modificatorias, por lo que, los argumentos de la demanda no se ajustan a los parámetros legales establecidos, además sostiene que respecto a la actora no existe registro de deuda por concepto de las

resoluciones cuestionadas, dado que se habían dejado sin efecto las resoluciones de sanciones por lo que no se había notificado al conductor del vehículo, por lo que afirma el proceso debería de concluir por extracción a la materia.

❖ **Aspecto Jurídico Considerado.**

Recurso de Amparo Constitucional.

Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional distingue tres modalidades de recurso de amparo en razón del origen del acto del poder público al que se le imputa la vulneración de los derechos fundamentales:

- a) recurso de amparo contra decisiones parlamentarias (art. 42);
- b) recurso de amparo contra decisiones gubernativas y administrativas (art. 43).
- c) recurso de amparo contra decisiones judiciales (art. 44).

❖ **Las Partes del Proceso.**

Sujeto activo: Servicio de Administración tributaria de la Municipalidad de Lima, (SAT).

Sujeto pasivo: Roberto Carmen Loyola.

❖ **Problema Jurídico.**

¿Es jurídicamente posible, que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento a favor del señor Roberto Carmen Loyola, debido a que el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima ha vulnerado su derecho al no haberlo notificado en su domicilio?.

❖ **Tesis Planteada.**

Juzgado Especializado en Procesos Contenciosos Administrativos declara fundada la demanda de Revisión Judicial.

La Sala de Derecho constitucional y Social Permanente de la Corte de Justicia de la Republica confirma la sentencia que declara fundada la demanda de Revisión Judicial.

❖ **Explicación de la tesis.**

Tesis planteada por el Juzgado Especializado en lo Contencioso:

En el caso de autos el actor pretende que se le revise la legalidad del procedimiento de ejecución coactiva, por una sanción impuesta contra su vehículo, como sustento de la demanda interpuesta precisa el actor, que no ha sido notificado con los actos administrativos cuestionados, tanto por la resolución de sanción como del inicio del procedimiento coactivo, por lo que dicho procedimiento coactivo adolece de nulidad.

A lo expuesto entonces, la sentencia de primera instancia de fecha de siete septiembre del 2011, declaro fundada la demanda en consecuencia nulo el expediente coactivo, sosteniendo que tanto la resolución de sanción como el inicio del procedimiento coactivo, no han sido notificadas ni al domicilio del actor ni al domicilio que consta en la tarjeta de propiedad del demandante, por lo tanto al no haberse respetado las formalidades que señala la ley N°26979, es que el procedimiento cuestionado se ha desarrollado con vicios que lo han invalidado.

Tesis planteada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica:

La Sala de derecho Constitucional sostiene que en cuanto a la eficacia de las notificaciones se debe de considerar lo expresado en el artículo 21 numeral 21.1 de la Ley 27444, “la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el ultimo domicilio que la persona a quien deba notificarse haya señalado ante el órgano administrativo o procedimiento análogo en la propia entidad en el último año. En este sentido señala la sala también, que de acuerdo al numeral 21.3, modificado por el artículo N° 01 del Decreto Legislativo N° 1029 señala: “en el acto de notificación personal, debe de entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en la que es efectuada, recabando firma y nombre con quien se ha entendido la diligencia. Si esta se niega a firmar o a recibir copia del acto notificado, hará constar ahí en el acta, teniéndose por bien noticiado, en este caso el notificador dejara constancia de las características del lugar donde se notifico”.

También señala la Sala, que la norma que precede, debe de ser concordante con el segundo y tercer párrafo del Numeral 4.3 del artículo 4 del reglamento de la Ley 26979, aprobado por decreto supremo 006-2003-EF, quien señala que para efectos de ejecución coactiva la notificación deberá de ser concordante con lo exigible en el artículo 21 y el numeral 21.3 de la ley 27444, la cual sostiene que para efectos de notificación dicha acta deberá de incluir la firma de testigos, si es que dicha acta de notificación fuera denegada a firmar o a identificarse el receptor.

En este sentido concluye la Sala de derecho Constitucional, que al haberse comprobado que no se ha notificado al administrado dentro de las formalidades que la ley contempla, se llegado a la conclusión que al no haberse notificado ni a su domicilio ni al domicilio que figura en la tarjeta de propiedad, el procedimiento de ejecución coactiva proviene de

NULO, por haberse vulnerado las normas contenidas en la Ley 26979 y su reglamento, transgredido el derecho fundamental del debido procedimiento.

Por las consideraciones confirmaron la sentencia y declararon FUNDADA la demanda y NULO el procedimiento de ejecución coactiva.

❖ **Análisis crítico.**

Luego de haber realizado una lectura detenida del fallo de la sentencia emitida en la Sala de Derecho Constitucional, he podido llegar a la conclusión que la sentencia está bien determinada, demostrando el respeto por las normas contempladas en la Constitución Política de Estado como es el artículo 139 numeral 3, la cual contempla la protección al debido proceso y que en innumerables sentencias ya se ha podido demostrar que deberá de entenderse al debido proceso de forma similar también en la vía administrativa Exp. 3891-2011; 4944-2011; 4644-2012 entre otras, como la garantía constitucional para hacer valer los derechos del administrado ante la administración pública, en este caso el SAT. Por otro lado la Sala de Derecho Constitucional ha determinado correctamente el fallo en razón que ha hecho respetar lo normado en el artículo 21.1 de la ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala que la notificación se hará en el domicilio que consta en el expediente o en el ultimo domicilio que la persona que haya señalado para tales efectos o en otro proceso análogo dentro de la entidad en el último año, así también el artículo 21.3 del Decreto Legislativo 1029 señala que el acto a notificar debe de señalar fecha y hora, tomando nota de el nombre y firma de la persona quien recibió la diligencia, si esta se niega a firmar se dejara constancia de dicho acto y se tomara fotografías de referencia del domicilio.

En este sentido podemos mencionar también que el segundo y tercer párrafo del numeral 4.3 del artículo 04 del reglamento de la Ley 26979

aprobado por el decreto supremo 069-2003-EF el cual señala que “si la obligación administrativa materia de ejecución forzada hubiese sido notificada según el numeral 21.3 de la Ley 27444, para ejecución coactiva, se acompañara copia del acta a el que se refiere dicha norma, dicha acta tendrá la firma de dos testigos en caso la persona con quien se entendió la diligencia se negó a firmar”.

Por último el artículo 14.1 de la Ley 26979 modificado por el artículo 01 de la Ley 28165 señala que “el procedimiento de ejecución coactiva se inicia con la notificación de la resolución al obligado a la ejecución coactiva, la cual contendrá un mandato de obligación exigible”.

Por otro lado Pando J, nos ilustra a manera de reflexión acerca de la notificación y su efecto y señala “otro aspecto importante que tiene las notificación es que este debe de ser eficaz y surtir sus efectos jurídicos dentro de la esfera del administrado, así entonces si el acto administrativo es emitido pero no notificado, este deja de ser eficaz por más que sea un acto administrativo valido, por lo tanto este deberá de cumplir en primer lugar su eficacia que solo lograra al llegar a manos del interesado” (2011).

De este análisis puedo concluir que la Sala de derecho Constitucional en concordancia con mi tesis, llegan a tener la misma finalidad, que es hacer entender que la diligencia de las notificaciones en la vía administrativa son fundamentales para garantizar los derechos del administrado, así también importantes para evitar gastos a la administración de justicia, en este sentido nos deja un claro ejemplo que la notificación debe de ser eficaz siempre y cuando el acto que sale de la administración pública llegue a manos del admistrado, para que este pueda hacer uso de sus derechos que le competen.

❖ **Segundo análisis.**

(Respecto a los derechos del administrado vulnerados al no haber un correcto diligenciamiento de la notificación).

❖ **Identificación de la Providencia.**

Sala Primera del Tribunal Constitucional Sentencia N° 1779-2002, Magistrado Ponente Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonsalez Ojeda, 27 de enero del 2003.

❖ **Hechos Relevantes.**

Con fecha 16 de abril del 2001, la recurrente interpone Acción de Amparo contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima y su Ejecutor Coactivo, con objeto de que se suspendan los procedimientos de ejecución coactiva de las 118 papeletas impuestas al vehículo de su propiedad por presuntas infracciones al Reglamento General de Tránsito; asimismo, solicita que cese la amenaza de captura que pesa contra su vehículo; alegando que la omisión de la notificación de todos los actos administrativos que sirven de título de ejecución, vulnera sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la propiedad.

Expone que solicitó la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva en aplicación de la sexta disposición complementaria, inciso d), de la Ley N.º 26979, toda vez que no se le había notificado resolución administrativa alguna relacionada con las citadas papeletas, conforme lo establece el artículo 9.º de la Ley N.º 26979, y que la notificación de las resoluciones de ejecución coactiva en el diario oficial *El Peruano* no surte efecto, pues debió realizarse en forma personal; agregando, que,

no obstante que el señor Víctor Chuchón Conde figura como propietario del vehículo el bien materia de *litis* es un bien conyugal.

❖ **Aspecto Jurídico Considerado.**

Recurso de Amparo Constitucional.

Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional distingue tres modalidades de recurso de amparo en razón del origen del acto del poder público al que se le imputa la vulneración de los derechos fundamentales:

- a) recurso de amparo contra decisiones parlamentarias (art. 42);
- b) recurso de amparo contra decisiones gubernativas y administrativas (art. 43).
- c) recurso de amparo contra decisiones judiciales (art. 44).

❖ **Las Partes del Proceso.**

Sujeto Activo. Olimpia Alcoser Pacotaípe de Chuchón.

Sujeto Pasivo. Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima SAT.

❖ **Problema Jurídico.**

¿Es jurídicamente posible, que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento a favor de la señora Olimpia Alcoser Pacotaípe de Chuchón, debido a que el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad de Lima ha vulnerado su derecho al no haberla notificado en su domicilio de forma personal o por correo electrónico, mas lo hizo de frente en el diario oficial el peruano, conociendo esta el domicilio de la demandante?

❖ **Tesis Planteada.**

El Primer Juzgado de Derecho Público de Lima, con fecha 28 de setiembre de 2001, declaró infundada la excepción propuesta e infundada la demanda.

Por otro lado la Sala del Tribunal Constitucional declara infundada la sentencia del primer Juzgado y revocando la declara fundada.

❖ **Explicación de la tesis.**

Tesis planteada por el 1° Juzgado de Derecho Publico de Lima: El Primer Juzgado de Derecho Público de Lima, con fecha 28 de setiembre de 2001, declaró infundada la excepción propuesta e infundada la demanda, considerando que las papeletas impuestas por la Policía Nacional constituyen actos de imperio o autoridad; que desde su emisión se impone la multa correspondiente; que el incumplimiento de pago genera su ejecución coactiva; y que, por lo tanto, la actora no puede alegar el desconocimiento de las sanciones, agregando que la notificación de la resolución coactiva se efectuó a través de las publicaciones en el diario oficial *El Peruano* y que la demandante no ha acreditado que la demandada desconociera su dirección domiciliaria a efectos de notificación personal. Por otro lado el actor apela la sentencia y la Sala del Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo confirmo la apelación por los mismos fundamentos.

Tesis planteada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica: A fojas 105 corre la resolución N° 01-53-066345 de fecha 18 de mayo de 2001, emitida por el ejecutor coactivo, mediante la cual se considera que la demandante tiene legitimidad necesaria para solicitar la suspensión de la cobranza al tener la condición de cónyuge del propietario del vehículo. En consecuencia, este extremo ya no es controvertible.

El artículo 14º de la Ley N° 26979 establece que el procedimiento de ejecución coactiva se inicia con la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva. En la sexta disposición complementaria y transitoria de la ley precitada, aplicable al caso de autos, se precisa que dicha notificación será personal con acuse de recibo en el domicilio del obligado, o por correo certificado, y que, cuando el domicilio del obligado sea desconocido, la notificación se realizará mediante la publicación, por dos veces consecutivas, en el Diario Oficial o, en su defecto, en uno de mayor circulación.

De las publicaciones de fojas 100 a 104 y de las afirmaciones de la entidad demandada (f. 109), se desprende que ésta no cumplió con notificar a la demandante, en forma personal o por correo certificado, las papeletas impugnadas, sino que, directamente, las publicó en el Diario Oficial. En consecuencia, dado que la demandada no ha acreditado desconocer el domicilio de la demandante, o que la dirección proporcionada a sus registros por ella sea incompleta o contenga datos inexactos, el Tribunal Constitucional aprecia que se han incumplido las formalidades establecidas en el dispositivo legal citado en el fundamento anterior, por lo que resulta comprobada la violación del derecho al debido proceso.

❖ **Análisis crítico.**

En efecto la sentencia emitida por la Primera Sala del Tribunal Constitucional, emite un pronunciamiento acertado en el sentido que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, que como ya lo he mencionado en jurisprudencias abundantes, Exp. 3891-2011; 4944-2011; 4644-2012, la observancia del artículo 139 de la constitución consagra en su numeral 3 que el debido proceso se deberá de considerar de igual forma en la vía administrativa, con la finalidad de salvaguardar los derechos del administrado.

En el caso concreto el juez de la primera instancia como el de la segunda en proceso de apelación habían coincidido en declarar infundada la demanda del recurrente en el sentido de que había sido bien notificada al haberse notificado en el diario oficial el peruano, conforme al artículo 09 de la ley 26979, argumentando que desconocían su dirección domiciliaria.

Por otro lado considero que el servicio de administración tributaria de Lima comete un error al pretender que se puede exigir una deuda coactivamente con el solo hecho de haberle notificado a unas de los propietarios de los vehículos materias de sanciones por papeletas de transito, pero que de acuerdo al artículo 14 de la ley 26979 la cual establece que la deuda será perceptible de ser cobrada coactivamente siempre y cuando el acto administrativo que emite la resolución de cobranza coactiva, sea notificada de forma personal al afectado en su domicilio o caso contrario a su correo electrónico o por ultimo de los casos al Diario Oficial el Peruano o uno de mayor circulación.

Bajo este contexto es que la SAT de Lima pretendió cobrar una deuda que se encontraba en procedimiento de ejecución coactiva, sin haber antes notificado de forma personal al administrado en su domicilio, no obstante conociendo el SAT cual era la dirección de la afectada, vulnerando así el debido procedimiento administrativo, al privarle su derecho de defensa consagrado también en el artículo 139 inciso 14 de la constitución Política del Estado.

Por otro lado Pando J, nos aclara el pensamiento al escribir que Como ya hemos mencionado, la notificación personal es la modalidad de notificación de mayor importancia, porque a través de ella se garantiza que el administrado llegue a conocer el contenido de la decisión de la administración. Las demás modalidades son básicamente

complementarias o para dar por cumplida la formalidad de notificar como es el caso de la notificación por publicación” (2011).

IV. DISCUSIÓN.

Este capítulo de mi tesis es quizás la más importante, puesto que me va a permitir comprobar mis supuestos jurídicos, a los que he llegado luego de haber identificado los problemas a los que el administrado está teniendo en relación a sus procedimientos administrativos ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima. Como ya hemos podido ver nuestro problema radica en la inobservancia del artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 por parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima y como esto viene vulnerando los derechos del administrado y el debido procedimiento administrativo el año 2016.

A partir de los resultados obtenidos, aceptamos nuestro supuesto jurídico general, en el sentido de que si el Servicio de Administración Tributaria de Lima no cumple el artículo 18° del Texto Único Ordenado de la ley 27444, entonces esta inobservancia está afectando el derecho del administrado el año 2016. Este incumplimiento que estamos confirmando como ya lo hemos mencionado a lo largo de esta tesis, trata de él desacertado diligenciamiento que se esta tenido de las notificaciones de los actos administrativos hacia los administrados y que este diligenciamiento debe de cumplirse de oficio y de forma obligatoria por parte de la administración pública, en este caso el SAT.

Estos resultados guardan relaciona con lo mencionado por Gordillo (2007), Benavente (2009).

Al respecto Gordillo, (2007) concluye que “todo acto individual que la administración quiera que sea oponible a las partes, e incluso jurídicamente existente, tiene que notificarlo, a efectos de que no se vulnere los derechos del administrado. No hay otra forma de quedar legalmente informado y ser oponible el acto, que mediante la notificación expresa, regular y válida. Por ello no tiene sentido teórico ni práctico regular supuestos casos de notificación si es que estos no son

correctamente dirigidos hacia el administrado, ya que todos los actos destinados a producir efectos jurídicos deben ser notificados en debida forma” (p.303).

En este sentido también se refiere Benavente (2009) al sostener que “En mérito a que la notificación no puede surtir efecto si no se ha llevado un correcto diligenciamiento de estas, en este sentido ellos sostienen también que la notificación tiene como condición la eficacia de un acto administrativo, dado que este implica la participación de conocimientos de actos y situaciones jurídicas de la administración a fin de que surta efectos entre los administrados, cualquier ineficacia de la notificación causaría la vulneración a los derechos de estos” (p. 42).

Por otro lado y para que no quede dudas de nuestro supuesto jurídico principal, vamos a compararlo con lo que nos dice el tribunal constitucional en el expediente. N.º 1741-2005-PA/TC “Al no haber tenido una correcta observancia en la notificación, por la parte de la municipalidad emplazada, podemos decir que dicho acto es nulo por causal insubsanable y por ende todo el procedimiento administrativo, toda vez que la actora no tuvo la posibilidad de cuestionar los actos administrativos en su debido momento, ello es, debido a la falta de notificación, lo cual implica además la vulneración a su derecho de defensa como administrado” (abril 2005).

Queda establecido entonces la relación que existe entre nuestro supuesto jurídico principal y los antecedentes mencionados, los cuales llegan a la conclusión, que efectivamente al no tener un correcto diligenciamiento de los actos administrativos emanados de la administración pública por medio de la notificación a la cual están obligados a ejercer de oficio, se está vulnerando entonces, el derecho del administrado por parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima el año 2016.

Ahora con relación a nuestro primer supuesto jurídico específico que trata de; “Si el Servicio de Administración Tributaria de Lima no está cumpliendo de forma correcta el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444, entonces está afectando un debido procedimiento administrativo”.

Al respecto hemos podido encontrar coincidencias a nuestro primer supuesto jurídico planteado por parte de Retortillo (1983), Lugo (2002), Bustillos (2014), estos estudiosos del derecho han coincidido en explicar que al no haberse efectuado una debida diligencia de las notificaciones al administrado, esta causaría automáticamente la vulneración al debido procedimiento administrativo del administrado.

Es así que Retortillo (1983), sostiene que “En un país como México, los órganos administrativos vienen vulnerando los derechos procesales del administrado así, como una serie de principios, este autor acusa de forma directa a la indebida notificación, esta falta de impulso procesal está causando pérdidas al administrado y vulnerando el debido procedimiento administrativo a tal punto que se ha llegado a pensar en modificar las leyes establecidas para el derecho administrativo en este país” (p. 64).

En este sentido Lugo (2002) también sostiene que, “La forma más perfecta de notificar es haciéndola personalmente, así también los tratadistas sostienen que la forma ideal para notificación personal es la correcta puesto que produce los efectos deseados por la parte demandante. Se debe entender que la notificación tiene las formalidades legales para así garantizar los principios del procedimiento, y dar a conocer a la parte demandada las actuaciones realizadas en un proceso por la autoridad administrativa, en este sentido la notificación garantizara

que la parte afectada pueda oponer sus descargos en el momento oportuno, en razón de un debido procedimiento administrativo (p. 219).

Bustillo, nos dice “Podemos afirmar entonces que notificar es aquel acto real o presunto, que tiene como finalidad poner a las partes el conocimiento de las decisiones que emanen de un proceso judicial o administrativo. En este sentido entendemos que la finalidad de la notificación no causara su fin si no fue comunicado al administrado, a tal punto que esta inobservancia causaría la vulneración al debido procedimiento administrativo” (2014, p. 138).

Al igual que en nuestro supuesto jurídico principal, emitiremos lo estimado por la Corte Suprema en Casación N° 8125-2009. Del Santa, en razón a fortalecer la tesis que estoy planteando.

“Como podemos apreciar en la sentencia de esta casación, los jueces señalan claramente que es la administración pública la obligada de notificar al administrado, los actos administrativos a fin de que estos surtan sus efectos y el administrado puedan ejercer sus derechos de defensa en pos de un debido procedimiento administrativo” (párr. 7).

A los argumentos planteados queda nuevamente establecida la relación que existe entre nuestras fuentes y el supuesto jurídico que hemos podido comprobar eficientemente, dando al lector la certeza que nuestra investigación está dando resultados y está llegando a la posible conclusión que el servicio de Administración Tributaria de Lima y la administración Pública en general tienen deficiencias con respecto al cumplimiento del artículo 18 de la Ley 27444.

Finalmente vamos a tratar de demostrar la relación que existe entre nuestro segundo supuesto jurídico específico el cual sostienen que “Si

hay incumplimiento en los plazos de notificación, entonces se está afectando el derecho de defensa del administrado”.

Al respecto se ha podido determinar que si existe relación de los autores que respaldan esta tesis con mi segundo supuesto jurídico específico, es así que Pando (2011) relaciona el incumplimiento de los plazos de la notificación con la vulneración al derecho de defensa del administrado.

Pando, (2011) “El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, emite la resolución administrativa N° 247 del año 2009, en la que se presenta como posible solución al problema del diligenciamiento de las notificaciones y señala que “en los últimos años ha quedado evidenciado que las notificaciones realizadas por medios convencionales (tradicionales) exceden notablemente los plazos procesales, en detrimento de los intereses de los justiciables, toda vez que las notificaciones dirigidas a direcciones domiciliarias, tardan demasiado en ser diligenciadas y que al llegar en el mejor de los casos a manos del administrado este ya no podría ejercer ninguna defensa puesto que el termino para hacerlo ya habría excedido en demasía, no siendo así en los archivos de la administración pública” (p. 260).

A manera de conclusión y bajo este fundamento Pando, también señala que “debemos de mencionar que el Servicio de Administración Tributaria, no ha podido controlar el debido diligenciamiento de la notificación que hace referencia el artículo 18 del TUO de la ley 27444, puesto que además de no tener mayor preocupación por realizar una correcta notificación de las resoluciones administrativas, este no ha cumplido en emitir dichos actos ni siquiera en su portal de resoluciones administrativas, haciendo más aún imposible que el administrado se pueda defender” (2011, p.261)

A lo expuesto y como en todo nuestra discusión a manera de despejara cualquier duda de nuestros segundo supuestos específico, debemos mencionar también que la Casación N° 8125-2009. Del Santa ha dejado el precedente que “(...) que cuando la administración conceda la nulidad de un acto administrativo esta debería de ser notificado de forma obligatoria por la entidad al administrado a fin de no afectar su derecho de defensa”

Como hemos podido determinar el Servicio de Administración tributaria de Lima como bien lo sabemos es un organismo descentralizado de la Municipalidad de Lima, tiene como función primordial el de recaudar dinero a efectos de que la municipalidad pueda asignarlos a las necesidades de la ciudad y de su población en general, dio esto es sumamente necesario la existencia de este organismo descentralizado eso no está en discusión, sino es que el manejo realizado de algunos funcionarios hacen que este se encuentre en los planes de mi presente tesis, puesto que he podido determinar que se ha estado vulnerando el derecho de los administrados.

Como ya lo he mencionado, he determinado y comprobado que el Servicio de Administración tributaria de Lima ha vulnerado el derecho de los administrados en el sentido que no ha estado diligenciando de forma correcta las notificaciones de los actos administrativos, haciendo caer en error ala administrado y haciendo que este no pueda ejercer su derecho de defensa dentro del plazo estimado por la norma en discusión, y que esta mala práctica del SAT ha sido puesta en evidencia cuando el administrado hacia llegar sus reclamos ante los órganos jurisdiccionales o ante el Tribunal Constitucional, donde el SAT no tenía más que aceptar que si había cometidos muchas irregularidades perjudicando al administrado al no haber notificado con una debida diligencia los actos administrativos.

Lo mencionado párrafo precedente solo es el inicio de lo que ha estado sucediendo a lo largo de estos años con el irregular actuar del SAT, muchos de los administrados se visto envueltos y sometidos por el actuar de este organismo en muchos de los casos han perdido sus bienes en procedimientos coactivos, bajo medidas cautelares muchas veces injustas, creadas para recaudar lo más posible y muchos otros administrados han tenido que dejar sus trámites iniciados ante la municipalidad por que no han tenido respuesta por parte de estos y si lo han tenido ya el plazo para subsanar o reclamar por el tramite realizado ya había fenecido, perdiendo así el dinero pagado por derecho de trámite, vulnerando así los derechos ya mencionados a lo largo de esta tesis.

Todos los problemas que hemos podido identificar lo hemos podido demostrar contrastando la información recabada, por medio de nuestros antecedentes, nuestras fuentes bibliográficas, nuestras entrevistas hechas a expertos y nuestro análisis jurisprudencial, quienes han dado fe que el Servicio de Administración Tributaria de Lima ha estado vulnerando el derecho del administrado al no haber diligenciado correctamente las notificaciones, trasgrediendo así lo señalado en el artículo 18 del TUO de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, dando así pie a que haya una nueva modificación en el TUO de la Ley 27444, que obligue a la administración pública a crear una página de notificación personal, que solo tenga acceso el administrado mediante una clave que pueda manejar, a fin de que sea notificado a tiempo real y respetando los pazos establecidos por la citada ley, sin perder la esencia fundamental de la notificación personal a domicilio del administrado.

V. CONCLUSIÓN.

Primera.

Se ha demostrado que el Servicio de Administración Tributaria de Lima ha vulnerando lo dispuesto por el artículo 18 del TUO de la Ley 27444 y así los derechos del administrado al diligenciar defectuosamente los actos administrativos.

Segunda.

Se ha comprobado que el Servicio de Administración Tributaria de Lima en incumplimiento del artículo 18 del TUO de la Ley 27444 ha vulnerado el debido procedimiento administrativo al diligenciar defectuosamente los actos administrativos.

Tercera.

Se ha determinado que el incumplimiento del plazo de notificación del Servicio de Administración Tributaria de Lima ha afectando el derecho de defensa del administrado al diligenciar defectuosamente los actos administrativos.

VI. RECOMENDACIONES.

Primera.

Se recomienda a las autoridades a fiscalizar al Servicio de Administración Tributaria de Lima para que cumpla con diligenciar correctamente las notificaciones de los actos administrativos a fin de que el administrado no vea perjudicado su derecho.

Segunda.

Se recomienda al administrado consignar en el procedimiento administrativo un correo electrónico en el cual sea notificado, a fin de tener mejor conocimiento de los actos administrativos.

Tercera.

Se recomienda al estado modificar la ley 27444 y hacer exigible la creación de una página de notificación personal para el administrado, el cual exija la notificación dentro del plazo establecido, bajo apercibimiento por la inobservancia de este nuevo método de notificación.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

7.1. Fuente primaria.

7.1.1. Entrevistados.

- Cornejo, J. (2016). Entrevista realizada al Procurador Público de la Municipalidad de Caraballo, abogado con alta experiencia en Derecho Administrativo.
- Pacheco, Y. (2016). Entrevista realizada a abogada de la Federación Nacional de Taxistas, abogada con amplia experiencia en trámites administrativos por deudas tributarias y no tributarias en procedimientos contra el SAT.
- Magan, L. (2016). Jueza del Segundo Juzgado Civil Transitorio de Lima Norte, abogada con experiencia en derecho administrativo y derechos humanos.
- Arbi, M. (2016). Abogado especialista en derecho tributario y procedimientos contra el SAT.
- Cantera, F. (2016). Abogado de la Municipalidad de Lima, abogado especialista en derecho administrativo.

7.2. Fuente secundaria.

7.2.1. Teóricas.

- Análisis jurídico del procedimiento administrativo de ejecución, (2003). 1º
- Batista S, Guzmán L Hernández A, Harold S, Jorge C. (junio de 2008) Publicado.

- Benavente H. (2009), La notificación como condición de eficacia de los actos administrativos, con especial referencia del derecho administrativo peruano, 3°. Edición Medellín Colombia, p. 38.
- Control judicial sobre los actos estatales (jueves 26 de junio de 2008). Universidad de Santa Maria.
- Definición de procedimiento administrativo, (2008, párr1). Recuperado. Ed. México. p.17.
- FERRER, Conceptos Básicos de Metodología de Investigación, 2010, recuperado de: <http://metodologia02.blogspot.pe/p/operacionalizacion-de-variables.html>.
- Gómez P. (1863), Curso Histórico-Exegético del Derecho Romano comparado con el Español, de la serna, 3° edición. Madrid. p.490, 491.
- Gordillo A. (2007), Tratado de derecho administrativo. El acto administrativo, tercer volumen, Buenos Aires. p. 303.
- Guía práctica sobre la validez y eficacia de los actos administrativos en el ordenamiento jurídico peruano 1° Ed. (Mayo 2014) Ministerio de Justicia y Derechos.
- Guía sobre la aplicación del Principio - Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos Primera edición: (Agosto de 2013) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Guía sobre la aplicación del Principio Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos, 2013, p.12.
- Hernández F. EL DERECHO DE DEFENSA. (2012) Publicada en la Revista Jurídica de la Facultad de Derecho y

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Tomo I.

- <http://definicion.de/procedimiento-administrativo/#ixzz4CA13bXBY>.
- Humanos Calle Scipión Llona 350, Miraflores, Lima 18 p. 16, 17, 18. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2014-07586.
- LANDEAU R. (Elaboración de Trabajos de Investigación). 1º edición, (2007) P.58, 59. ISBN 980354241.
- Leal O. universidad santa maría decanato de postgrado y extensión dirección de investigación especialización en derecho administrativo.
- Ley 27444, ley que regula el procedimiento administrativo general <http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/Ley-de-Procedimiento-Administrativo-de-PersonalLey27444.pdf>.
- Lugo J. (2002). La conflictividad en relación a la notificación personal. Breves Consideraciones, p221. Pp.240.
- MARINO COLMENARES Guía práctica sobre la validez y eficacia de los actos administrativos en el ordenamiento jurídico peruano 1º Ed. (Mayo 2014). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Calle Scipión Llona 350, Miraflores, Lima 18 p. 16, 17, 18. Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2014-07586.
- Moutón Luis. Enciclopedia jurídica española, Volumen 23. Editor Seix. páginas. MADRID
- Noción del acto administrativo en las diferentes escuelas originarias (10 de junio de 2008).

- Pando J, Notificaciones en el procedimiento administrativo. Análisis de las modificatorias vinculadas al decreto legislativo 1029, (2011). Derecho de la Universidad Católica del Perú, p.254, 258.
- Palacios, R. (14 DE AGOSTO DEL 2015) La grandísima concha del SAT de Castañeda Lossio. Un Blog de Política Independiente. <http://rosamariapalacios.pe/2015/08/14/la-grandisima-concha-del-sat-de-castaneda-lossio/>
- Piratova, A. (2013). El 3 de Abril recuperado de <https://prezi.com/aywwbsagdjvo/notificaciones-y-recursos/>
- RETORTILLO S. (1983) El reto de una administración racionalizada, Ed. Civitas, col. Cuadernos, Madrid, p. 64.
- Revista Electrónica de la facultad de Derecho. (2013). Núm.1.Universidad de Santander, UDES Cúcuta <http://service.udes.edu.co/revistas/index.php/Lex-ODES/index.html> ISSN: 2346-030X
- Sentencia del tribunal constitucional, (2004). EXP. N.º 3741-2004-AA/TC.
- Sentencia del tribunal constitucional. (2012), EXP. n.º 03122--PA/TC.
- Sentencia del tribunal constitucional. EXP. N.º 3741-2004-AA/TC – fundamento 21.
- Ucharima T. (2013). Ineficiencia de la administración pública y su aplicación de la ley 27444, en la municipalidad provincial de Pisco, Perú, p.12.

7.3. Fuente metodológica.

Apa (2010) Manual de Publicaciones 3° ed. México. El Manual Moderno

Balestri, M. (2002). Como se elabora un proyecto de investigación 6 ed.

Behar, D. (2008). Metodología de la investigación. Edición Shalom consultores.

IX. ANEXOS.

ANEXO 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE TESIS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: **JHONNATHAN ALFREDO VARGAS RIOS**

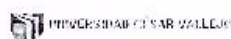
FACULTAD/ESCUELA: **DERECHO / DERECHO**

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	“LA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 18 DEL TUO DE LA LEY N° 27444 EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA-2016 “
PROBLEMA PRINCIPAL	¿De qué manera la inobservancia del artículo 18° del Texto Único Ordenado de la ley 27444 de parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima, guarda relación con los derechos del administrado el año 2016?
OBJETIVO GENERAL	Demostrar que la inobservancia del artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 por parte del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, afecta los derechos del administrado 2016.
SUPUESTO JURÍDICO PRINCIPAL	Si el Servicio de Administración Tributaria de Lima no cumple el artículo 18° del Texto Único Ordenado de la ley 27444, entonces esta inobservancia está afectando el derecho del administrado el año 2016.
PROBLEMA ESPECÍFICO 1	¿Cómo el Servicio de Administración Tributaria de Lima en incumplimiento del artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, viene afectando el debido procedimiento administrativo?

OBJETIVO ESPECÍFICO 1	Comprobar si el Servicio de Administración Tributaria de Lima está cumpliendo de forma correcta el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444, o está afectando al debido procedimiento administrativo.
SUPUESTO JURÍDICO 1	Si el Servicio de Administración Tributaria de Lima no está cumpliendo de forma correcta el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444, entonces está afectando un debido procedimiento administrativo.
PROBLEMA ESPECÍFICO 2	¿En qué medida el incumplimiento de los plazos de notificación por parte del Servicio de Administración Tributaria podría afectar el derecho a la defensa del administrado?
OBJETIVO ESPECÍFICO 2	Determinar de qué manera el incumplimiento de los plazos de notificación afecta el derecho de defensa del administrado.
SUPUESTO JURÍDICO ESPECÍFICO 2	Si hay incumplimiento en los plazos de notificación, entonces se está afectando el derecho de defensa del administrado.
DISEÑO DEL ESTUDIO	Teoría: Fundamentada Alcance: Explicativo
POBLACIÓN Y MUESTRA	Como población tenemos a; El Servicio de Administración Tributaria de Lima. La muestra serán; jueces, magistrados, abogados, especialistas en derecho administrativo y tributario.
CATEGORÍAS	El indebido diligenciamiento de los actos de notificación.
	La vulneración a los derechos del administrado.

Anexo 2

Ficha de validación de entrevista por el doctor Chávez Sánchez Jaime Elider.



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Chávez Sánchez Jaime Elider
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente - UCV
 1.3. Nombre del instrumento método de evaluación: Guía de Análisis Jurisprudencial
 1.4. Autor(A) de Instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE					MINIMAMENTE ACEPTABLE					ACEPTABLE		
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											X		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											X		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											X		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											X		
5. SUSTENTENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.											X		
6. INDEPENDENCIA JUDICIAL	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											X		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.											X		
9. METODICIDAD	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.											X		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											X		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

90%

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

90. %

Lima, del 2015

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE:

DNI No. 88676402 Tel: 9642661152

Anexo 3

Ficha de validación de entrevista por el doctor Santisteban Llontop Pedro Pablo.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Santisteban Llontop Pedro Pablo
 1.2. Cargo e institución donde labora: Fiscal Militar Policial - Ministerio de Defensa
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Encuesta
 1.4. Autor(A) de Instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje comprensible.													
2. OBJETIVIDAD	Está adecuado a las leyes y principios científicos.													
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													
5. SUFFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.													
6. INTENCIONALIDAD	Está adecuado para valorar las variables de la hipótesis.													
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.													
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.													
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.													

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

85%

85%

Lima, del 2015

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 09803011 Tel. 9832 38657

PEDRO SANTISTEBAN LLONTOP
 CNI 11384
 DOCTOR EN DERECHO

Anexo 4

Ficha de validación de entrevista por la doctora Castro Rodríguez Lesly.



UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Castro Rodríguez Lesly
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Entrevista
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Lesly Castro Rodríguez

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACTUABLE										BASTANTEMENTE ACEPTABLE				ACEPTABLE			
		10	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100					
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje comprensible.											X							
2. OBJETIVIDAD	Está adecuado a las leyes y principios científicos.											X							
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											X							
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											X							
5. SUFFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											X							
6. INTENCIONALIDAD	Está adecuado para validar las variables de la Hipótesis.											X							
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											X							
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, hipótesis, variables e indicadores.											X							
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.											X							
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											X							

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
 El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

90%

90%

Lima, del 2015

FIRMA DEL EXPERTO/INVESTIGADOR

Lesly Castro R.

DNI No. Telf.

22977746 980712526

Anexo 5

Ficha de validación de entrevista por la doctor Israel Ballena Cesar.



UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Israel B. Cesar
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:
 1.4. Autor(A) de Instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE					MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE				
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.										X			
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.										X			
3. ADECUACIÓN	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.										X			
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.										X			
5. SUFFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales										X			
6. INDISCERNIBILIDAD	Esta adecuado para evaluar las variables de la Hipótesis.										X			
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.										X			
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos, hipótesis, variables e indicadores.										X			
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.										X			
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.										X			

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

85%

85%


Firma: Al de Mayo del 2015

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 465622 Telf: 953222199

Anexo 6

Ficha de validación de entrevista por la doctor Castro Rodríguez Leslly

 UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Castro Rodríguez Leslly

1.2. Cargo e institución donde labora:

1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación:

1.4. Autor(A) de instrumento:

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE					BENIGNAMENTE ACEPTABLE				ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Este formulado con lenguaje comprensible.											X		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											X		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											X		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											X		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											X		
6. INTRINSECUALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos											X		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.											X		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde a la metodología y diseño aplicados para probar las hipótesis.											X		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											X		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación

- El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:

90%

90 %

Lima del 2015

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

Leslly Castro R.

DNI N° Telf:
22974746 980712526

Anexo 7

Instrumento – entrevista

Entrevista al doctora Lucia Gabriela Magan Montes.

ENTREVISTA (FUNCIONARIO, EXPERTOS)

**"LA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 18 DEL TUO DE LA LEY N° 27444 EN EL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA-2016"**

EXPERTO- CARGO: JUEZ DEL JUZGADO CIVIL TRANSITORIO LIMA NORTE.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: LUCIA GABRIELA MAGAN MONTES.

ENTREVISTA N°

LA PRESENTE ENTREVISTA TIENE COMO FINALIDAD CONOCER LA OPINIÓN JURÍDICA DE EXPERTOS EN LA MATERIA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA CON RELACIÓN A LA INOBSERVANCIA DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 18° DEL TUO DE LA LEY 27444 "LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL" DENTRO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT - LIMA.

Objetivo General:

Demostrar que la inobservancia del artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 por parte del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, afecta los derechos del administrado el año 2016.

1. ¿Qué tan importante es para usted la notificación de los actos administrativos del Servicio de Administración Tributaria de Lima (en adelante SAT)?

Las notificaciones de los actos administrativos son muy importantes, puesto que constituyen un mecanismo por el cual la administración pública pone de conocimiento al administrado. Tanto los actos que emiten, ya sea de oficio o a solicitud del administrado.

2.- ¿Qué entiende usted acerca del artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444 que consagra el diligenciamiento de la notificación, por parte de la administración pública?

El artículo 18 de la ley 27444 modificado por el Decreto Legislativo 1272, el cual expresa que es la administración Pública la obligada de diligenciar las notificaciones hacia el administrado, esto es para que aquella resolución emitida por la administración Pública llegue a manos del destinatario en su domicilio y cumpliendo las formalidades establecidas.

3.- ¿Considera usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima lleva a cabo un debido diligenciamiento de las resoluciones que a de notificar, en garantía de los derechos del administrado?

No puedo adelantar una opinión al respecto puesto que no he tenido un caso en concreto sobre el Servicio de Administración Tributaria de Lima, pero sí puede referirme a la administración Pública en General y puede llegar a la conclusión que la administración hace todos los esfuerzos por hacer cumplir la diligencia de las notificaciones.

4.- ¿Cree usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima al notificar un acto administrativo en domicilio distinto al administrado, afecta el derecho del administrado?

Si la notificación que se ha hecho en el domicilio del administrado pierde su efecto, por lo tanto este acto administrativo surge nulo al no haberse concretado su finalidad, si este es reclamado dentro del plazo establecido tendría que ser anulado, pero si no fuera así, se anula su validez.

Objetivo Específico 1:

Comprobar si el Servicio de Administración Tributaria de Lima está cumpliendo de forma correcta el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444, o está afectando al debido procedimiento administrativo.

5.- ¿Considera usted que al no haber sido notificado de forma diligente el acto administrativo por parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima se está afectando a un debido procedimiento administrativo?

Por supuesto ya la hemos mencionado el diligenciamiento de la notificación son obligaciones de la entidad que lo dicta y todo inatendimiento a esta obligación afecta el debido procedimiento administrativo.

6.- ¿Conoce usted algún órgano del Estado que sancione al Servicio de Administración Tributaria de Lima por no tener cuidado al momento de diligenciar los actos administrativos al administrado, los cuales podrían afectar el debido procedimiento administrativo?

Tanto entidad Pública tiene una Oficina de Control Interno OCI, que es la encargada de regular las acciones que cumplen todas las funciones y subfunciones de la Administración Pública, en este caso el Servicio de Administración Tributaria de Lima es un organismo descentralizado de la Municipalidad de Lima pero controlado por el OCI.

Objetivo Específico 2:

Determinar de qué manera el incumplimiento de los plazos de notificación por el Servicio de Administración Tributaria de Lima afecta el derecho de defensa del administrado.

7.- ¿De qué manera considera usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima incumple los plazos de notificación?

Las notificaciones se incumplen por no haber tenido un
correcto diligenciamiento quedando muchas veces en los
plazos establecidos en la ley 27444, muestra de lo teneboso
donde la notificación de la Municipalidad no llega al domicilio
del administrado y condeplan la notificación para tener praxias.

8.- ¿Cree usted que el incumplimiento de los plazos de notificación por el Servicio de
Administración Tributaria de Lima, afecta el derecho de defensa del administrado?

Por supuesto que si el derecho a la defensa por venir
a ser una garantía Constitucional, afecta la seguridad
que el administrado pueda actuar de manera oportuna y
diligente de los derechos que la ley le otorga, si no hay
un control en los plazos de notificación la vulneración a la Constitución.

9.- ¿A su entender que otros derechos se estarían vulnerando al no diligenciarse de
forma correcta la notificación de los actos administrativos por parte de Servicio de
Administración Tributaria de Lima?

A la defensa y principios procesales como son
el debido procedimiento, el de defensa se relaciona entre
el la administración Pública, así también en el sentido
más amplio al no poder garantizar la vulneración de los derechos
en la vía administrativa, se perjudica al administrado en la
vía judicial.

Jonathan Vargano Rio

Nombre del entrevistado:

PODER JUDICIAL
LUCKY H. VARGAS
JUEZ
REPRESENTA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
CORTE SUPLENTE DE LOS TRIBUNALES

Nombre y firma del entrevistado

Anexo 8

Instrumento – entrevista

Entrevista al doctora Yda Paola Pacheco Portal.

ENTREVISTA (FUNCIONARIO, EXPERTOS)

**"LA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 18 DEL TUO DE LA LEY N° 27444 EN EL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA-2016"**

EXPERTO- CARGO: *Yda Paola Pacheco Portal.*

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: *Abogada*

ENTREVISTA N°

LA PRESENTE ENTREVISTA TIENE COMO FINALIDAD CONOCER LA OPINIÓN JURÍDICA DE EXPERTOS EN LA MATERIA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA CON RELACIÓN A LA INOBSERVANCIA DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 18° DEL TUO DE LA LEY 27444 "LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL" DENTRO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA.

Objetivo General:

Demostrar que la inobservancia del artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 por parte del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, afecta los derechos del administrado el año 2016.

1.- ¿Qué tan importante es para usted la notificación de los actos administrativos del Servicio de Administración Tributaria de Lima (en adelante SAT)?

Es importante porque constituye una relación jurídica procesal con el efecto de producir una ocasión, que interponer los recursos necesarios para contravenir la decisión, para el administrado es de gran importancia ya que mediante la notificación se cumple con el derecho fundamental al debido proceso administrativo.

2.- ¿Qué entiende usted acerca del artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444 que consagra el diligenciamiento de la notificación, por parte de la administración pública?

No notificación debe cumplirse en el día y hora, para garantizar el proceso correspondiente a ejecutar los actos administrativos respetando los plazos de por medio mediante ley.

3.- ¿Considera usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima lleva a cabo un debido diligenciamiento de las resoluciones que a de notificar, en garantía de los derechos del administrado?

No considero que se este llevando a cabo un debido diligenciamiento de las resoluciones ya que existen problemas en las notificaciones que envía el SAT y todos los entes del estado por lo general afecta al administrado ya que no es notificado a tiempo.

4.- ¿Cree usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima al notificar un acto administrativo en domicilio distinto al administrado, afecta el derecho del administrado?

Considero que si ya que existen medidas para asegurar la notificación mediante el art. 18 de la ley 27444, la cual indica que se debe notificar al administrado mediante el cual si se notifica en domicilio distinto al afectado el derecho al administrado.

Objetivo Específico 1:

Comprobar si el Servicio de Administración Tributaria de Lima está cumpliendo de forma correcta el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444, o está afectando al debido procedimiento administrativo.

- 5.- ¿Considera usted que al no haber sido notificado de forma diligente el acto administrativo por parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima se está afectando a un debido procedimiento administrativo?

Claro que sí afecta, ya que es un caso que afecta al administrado. Por ser un caso contemplado en nuestra carta orgánica, es el artículo 109 inciso 3, donde se considera que el debido proceso se debe respetar de acuerdo a ley.

- 6.- ¿Conoce usted algún órgano del Estado que sancione al Servicio de Administración Tributaria de Lima por no tener cuidado al momento de diligenciar los actos administrativos al administrado, los cuales podrían afectar el debido procedimiento administrativo?

Sí conozco, puedo presentar una queja ante la Presidencia de la defensa del Contribuyente para que notifique a la autoridad competente, esto se conoce más como Defensoría del Contribuyente, más específicamente, la distinguida Defensoría del pueblo.

Objetivo Específico 2:

Determinar de qué manera el incumplimiento de los plazos de notificación por el Servicio de Administración Tributaria de Lima afecta el derecho de defensa del administrado.

- 7.- ¿De qué manera considera usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima incumple los plazos de notificación?

En el Servicio de Administración Tributaria, a mi entender
se considera que incumple ya que no se toma precauciones
al momento de notificar plazos, esto mayormente
por medio al administrado, los cuales generan dudas a
ellos.

8.- ¿Cree usted que el incumplimiento de los plazos de notificación por el Servicio de Administración Tributaria de Lima, afecta el derecho de defensa del administrado?

Claro el incumplimiento desde ya es una irresponsabilidad
por parte del administrador ya que no es diligente al
cumplir plazos respectivos al nos basamos a la constitución
nos indica que toda ciudadanía tiene derecho a la defensa en
todos los procesos judiciales como también en los administra-
tivos, razón por la cual debería cumplir este derecho.

9.- ¿A su entender que otros derechos se estarían vulnerando al no diligenciarse de forma correcta la notificación de los actos administrativos por parte de Servicio de Administración Tributaria de Lima?

Se estarían vulnerando el derecho a la defensa y a que no se
responda o manifestar su descargo por parte del administrado.
También se estaría vulnerando el derecho a la información
ya que el estado es un ente que tiene la obligación mediante
sus entidades públicas informar de los procesos tanto judiciales
como administrativos relacionados con su persona.


Yara Paula Pacheco Purtaí
ABOGADA
Reg. C.A.L. 72428

Nombre del entrevistador

Nombre y firma del entrevistado

Anexo 9

Instrumento – entrevista

Entrevista al doctor Javier Abdón Cornejo Pereyra.

ENTREVISTA (FUNCIONARIO, EXPERTOS)

**"LA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 18 DEL TÚO DE LA LEY N° 27444 EN EL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA-2016"**

EXPERTO- CARGO: *Javier Abdón Cornejo Pereyra.*
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: *Procurador Público Municipalidad de*
ENTREVISTA N° *01* *Carabayita.*

LA PRESENTE ENTREVISTA TIENE COMO FINALIDAD CONOCER LA OPINIÓN JURÍDICA DE EXPERTOS EN LA MATERIA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA CON RELACIÓN A LA INOBSERVANCIA DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 18° DEL TÚO DE LA LEY 27444 "LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL" DENTRO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA.

Objetivo General:

Demostrar que la inobservancia del artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 por parte del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, afecta los derechos del administrado el año 2016.

1.- ¿Qué tan importante es para usted la notificación de los actos administrativos del Servicio de Administración Tributaria de Lima (en adelante SAT)?

El acto de notificar, en sí, ya es sumamente importante para garantizar un debido procedimiento administrativo, puesto que a la vez este ejercerá que el administrado pueda oponerse de ser el caso a con-templar una resolución que acredite algún derecho para su beneficio con respecto a la importancia que debe de tener el ser notificado. Por lo tanto, esto deberá de ser lo mismo para cualquier entidad pública del estado.

2.- ¿Qué entiende usted acerca del artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444 que consagra el diligenciamiento de la notificación, por parte de la administración pública?

Específicamente el artículo 18 de la ley 27444, está normado para garantizar el adecuado diligenciamiento que debería de tener el ser de Lima o la administración pública de los actos administrativos por medio de la notificación, el cual debe de cumplirse respetando las pautas establecidas por la ley en menor.

3.- ¿Considera usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima lleva a cabo un debido diligenciamiento de las resoluciones que a de notificar, en garantía de los derechos del administrado?

Considero que no se está llevando un debido diligenciamiento de las notificaciones a menos del administrado, esta cosa causa no solo de una tardía entrega por parte de los notificadores, sino también a causa de una tardía emisión de las resoluciones que emite en este caso el SAT y toda la administración pública en general y esto obviamente afecta el derecho del administrado, puesto que estos no sabrán como solucionar dicho derecho dado que todo el sistema administrativo es muy lento en el Perú.

4.- ¿Cree usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima al notificar un acto administrativo en domicilio distinto al administrado, afecta el derecho del administrado?

Por supuesto, la notificación está repleta de formalidades que deberían de ser cumplidas, la notificación personal la encontramos en el art. 21 de la ley 27444, lo cual contempla las supuestas en las que se debe de notificar al administrado y como esta se hará en caso no se encuentre en su domicilio, las cuales al no hacerse con el diligenciamiento adecuado, estaría violando el derecho a la defensa del administrado.

Objetivo Específico 1:

Comprobar si el Servicio de Administración Tributaria de Lima está cumpliendo de forma correcta el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444, o está afectando al debido procedimiento administrativo.

- 5.- ¿Considera usted que al no haber sido notificado de forma diligente el acto administrativo por parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima se está afectando a un debido procedimiento administrativo?

Por supuesto que se afecta el debido procedimiento administrativo, más aún si sabemos que este es un principio contemplado por la Constitución Política, la cual garantiza que el administrado pueda presentar sus objeciones o contradicciones y pruebas para obtener de estos pronunciamientos o resoluciones motivadas en derecho que permitan hacer un procedimiento administrativo dentro de la protección a los derechos del administrado.

- 6.- ¿Conoce usted algún órgano del Estado que sancione al Servicio de Administración Tributaria de Lima por no tener cuidado al momento de diligenciar los actos administrativos al administrado, los cuales podrían afectar el debido procedimiento administrativo?

No conozco ningún órgano del estado que sancione al SAT por el incumplimiento de sus funciones, pero el administrado si puede interponer sus quejas ante la misma entidad o denunciar ante la Defensoría del Pueblo para que estos inicien las investigaciones y lleguen a sanciones así al funcionario responsable en caso se haya comprobado una irregularidad.

Objetivo Específico 2:

Determinar de qué manera el incumplimiento de los plazos de notificación por el Servicio de Administración Tributaria de Lima afecta el derecho de defensa del administrado.

- 7.- ¿De qué manera considera usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima incumple los plazos de notificación?

El ser lo incumple puesto que no tienen una debida diligencia, no existe un interés por dar a conocer las resoluciones al administrado, las cuales en deudas no tributarias generaria un beneficio para la administración.

8.- ¿Cree usted que el incumplimiento de los plazos de notificación por el Servicio de Administración Tributaria de Lima, afecta el derecho de defensa del administrado?

La Constitución Política del Perú contempla el derecho de defensa en todos los procesos judiciales y así también en el ámbito administrativo, este es una garantía que debe de ejercer toda los organismos del estado y el incumplimiento de los plazos de notificación obstaculiza y vulnera este derecho.

9.- ¿A su entender que otros derechos se estarían vulnerando al no diligenciarse de forma correcta la notificación de los actos administrativos por parte de Servicio de Administración Tributaria de Lima?

El no diligenciarse correctamente la notificación hacen perder los derechos del administrado a defenderse en caso tengan alguna sanción a la vez obstaculiza todo el procedimiento administrativo haciendo muchas veces que los administrado pierdan sus bienes sin medidas cautelares.

Ignorathen Jaramas mico

Nombre del entrevistador

14/5



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABALLITO

JAVIER ARDON CORNEJO PEREIRA
PROCURADOR DISTRITAL MUNICIPAL
REG. CAL. Y SUM.

Nombre y firma del entrevistado

Anexo 10

Instrumento – entrevista

Entrevista al doctor Julio Manuel Arbi Ospino.

ENTREVISTA (FUNCIONARIO, EXPERTOS)

"LA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 18 DEL TUO DE LA LEY N° 27444 EN EL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA-2016"

EXPERTO- CARGO: JULIO MANUEL ARBI OSPINO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: ESPECIALISTA EN DERECHO TRIBUTARIO

ENTREVISTA N°

LA PRESENTE ENTREVISTA TIENE COMO FINALIDAD CONOCER LA OPINIÓN JURÍDICA DE EXPERTOS EN LA MATERIA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA CON RELACIÓN A LA INOBSERVANCIA DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 18° DEL TUO DE LA LEY 27444 "LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL" DENTRO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT - LIMA.

Objetivo General:

Demstrar que la inobservancia del artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 por parte del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, afecta los derechos del administrado el año 2016.

1.- ¿Qué tan importante es para usted la notificación de los actos administrativos del Servicio de Administración Tributaria de Lima (en adelante SAT)?

Por que tiene el termino respectivo para poder impugnar dentro del termino de la ley y con respecto a esas notificaciones deben de ser acreditados de manera correcta y en caso de no cumplir con los requisitos debe de entonarse como inexistente o diligenciamento

2.- ¿Qué entiende usted acerca del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la ley 27444 que consagra el diligenciamiento de la notificación por parte de la administración pública?

El diligenciamiento de la notificación es la modalidad en que el empleado de la administración pública debe realizar que el acto administrativo llegue a manos del administrado, esta recepción debe de constar día, hora, fecha, firma de tenerse en ese caso de no encontrarse el destinatario (como testigos), en las respectivas fotografías por lugar y original bajo la firma, aunque en la realidad esto no se cumple por la falta.

3.- ¿Considera usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima lleva a cabo un debido diligenciamiento de las resoluciones que a de notificar, en garantía de los derechos del administrado?

No se considera por cuanto al SAT, es la misma persona jurídica que actúa como demandante, como notificador, y el que notifica es un Subordinado y actúa directivo de lo SAT. Muchas veces por como notificamos cuando en la realidad nunca existió un diligenciamiento adecuado, para eso es SAT, debería de controlarse un Guacá que se haga responsable y así evitar tanto problema al administrado al cual siempre violamos su derecho.

4.- ¿Cree usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima al notificar un acto administrativo en domicilio distinto al administrado, afecta el derecho del administrado?

Por supuesto que afecta el derecho del administrado, ya que las notificaciones deben darse en el domicilio que figura en la RENIEC o en un domicilio real que exige el administrado para que sujeta este la notificación.

Objetivo Específico 1:

Comprobar si el Servicio de Administración Tributaria de Lima está cumpliendo de forma correcta el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444, o está afectando al debido procedimiento administrativo.

5.- ¿Considera usted que al no haber sido notificado de forma diligente el acto administrativo por parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima se está afectando a un debido procedimiento administrativo?

...No solo de afecta un debido procedimiento administrativo, sino...
También se está afectando el derecho a la petición y a la
defensa consagrada en el artículo 139 de la Constitución Política
del Perú.

6.- ¿Conoce usted algún órgano del Estado que sancione al Servicio de Administración Tributaria de Lima por no tener cuidado al momento de diligenciar los actos administrativos al administrado, los cuales podrían afectar el debido procedimiento administrativo?

No suele sancionarse y para regular estos han creado un departamento
de supervisión del SAT, que al igual también es un subordinado de la SAT.
Que al final tiene que salir a cuenta de la SAT. También se podría
formular el recurso de amparo ante el juez al derecho a hacer la defensa
ya siendo notificada o ejecutada sin recibirlo. Haciendo perder los bienes
del administrado.

Objetivo Específico 2:

Determinar de qué manera el incumplimiento de los plazos de notificación por el Servicio de Administración Tributaria de Lima afecta el derecho de defensa del administrado.

7.- ¿De qué manera considera usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima incumple los plazos de notificación?

Al no tener una regulación bien establecida que haga cumplir el diligenciamiento de la notificación. Hacen intencionalmente que se pierda los derechos del administrado por otro lado se debe de perder la costumbre de dar de la notificación con la palabra de que si la notifica cuando en la realidad no lo hizo, y si hubiera un protocolo ya no se recordaría sus derechos.

8.- ¿Creen usted que el incumplimiento de los plazos de notificación por el Servicio de Administración Tributaria de Lima afecta el derecho de defensa del administrado?

Por supuesto que afecta por cuanto el SAT le sanciona realizando notificaciones defectuosas para que las resoluciones no sean impugnadas y recorran en consentimiento y estas arbitrariedades no solo se refieren al derecho de defensa del administrado sino también incurrir en el delito Contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica, pero lamentablemente el administrado paga antes de hacer judicial su vulneración.

9.- ¿A su entender que otros derechos se estarían vulnerando al no diligenciarse de forma correcta la notificación de los actos administrativos por parte de Servicio de Administración Tributaria de Lima?

Derechos Sustantivos, por cuanto las notificaciones no se cumplen en la fecha debidamente, los administrados son posibles de embargo de sus bienes, en procedimientos coactivos, incurrir en Delitos Contra la Fe Pública y delito de abuso de autoridad que sanciona el código Penal.

Interventor Carlos Ríos

Nombre del entrevistador

Nombre y firma del entrevistado

Anexo 11

Instrumento Guía de Análisis Jurisprudencial.

Expediente N° 863-2012-Lima.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUÍA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

TÍTULO

**"LA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 18 DEL TUO DE LA LEY N° 27444
EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA-2016"**

1.	NÚMERO DE SENTENCIA	N° 863-2012-Lima.
2.	TIPO DE SENTENCIA	Sentencia de Revisión Judicial
3.	FECHA DE SENTENCIA	02 de agosto del 2012.
4.	MAGISTRADO PONENTE	Vinatea Medina
5.	ACTOR O ACCIONANTE	Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima

7.	NORMAS CONSTITUCIONALES OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO	Artículo 139.3 el derecho fundamental al Debido Proceso que hoy en día también se vo en la vía administrativa, la cual garantiza el debido procedimiento administrativo.
8.	PROCEDIMIENTOS ANTERIORES	Demanda de Revisión Judicial ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima
9.	PROBLEMA JURÍDICO DE LA SENTENCIA	Determinar que el diligenciamiento de las notificaciones, no fueron de acuerdo al artículo 21.3 de la ley 27444 concordante con el artículo 04 de la ley 26979
10.	DECISIÓN	Declararon FUNDADA la demanda y NULO el procedimiento de ejecución coactiva.
11.	DOCTRINA DEL CASO CONCRETO EN LA DECISIÓN MAYORITARIA (TESIS)	La Sala de derecho Constitucional sostiene que en cuanto a la eficacia de las notificaciones se debe de considerar lo expresado en el artículo 21 numeral 21.1 de la Ley 27444. "la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificarse haya señalado ante el órgano administrativo o procedimiento análogo en la propia entidad en el último año. En este sentido señala la sala también, que de acuerdo al numeral 21.3, modificado por el artículo N° 01 del Decreto Legislativo N° 1029 seña.a: "en el acto de notificación personal, debe de entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en la que es efectuada, recabando firma y nombre con quien se ha entendido la diligencia. Si esta se niega a firmar o a recibir copia del acto notificado, hará constar ahí en el acta,

12.	COMENTARIOS Y CONCLUSIONES	<p>Luego de haber realizado una lectura detenida del fallo de la sentencia emitida en la Sala de Derecho Constitucional, he podido llegar a la conclusión que la sentencia está bien determinada, demostrando el respeto por las normas contempladas en la Constitución Política de Estado como es el artículo 139 numeral 3, la cual contempla la protección al debido proceso y que en innumerables sentencias ya se ha podido demostrar que deberá de entenderse al debido proceso de forma similar también en la vía administrativa Exp. 3891-2011; 4944-2011; 4644-2012 entre otras, como la garantía constitucional para hacer valer los derechos del administrado ante la administración pública, en este caso el SAT. Por otro lado la Sala ha determinado correctamente el fallo en razón al artículo 21.1 de la ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala que la notificación se hará en el domicilio que consta en el expediente o en el último domicilio que la persona que haya señalado para tales efectos o en otro proceso análogo dentro de la entidad en el último año, así también el artículo 21.3 del Decreto Legislativo 1029 señala que el acto a notificar debe de señalar fecha y hora, tomando nota de el nombre y firma de la persona quien recibió la diligencia, si esta se niega a firmar se dejara constancia de dicho acto y se tomara fotografías de referencia del domicilio.</p>
-----	-----------------------------------	--

Anexo 12

Instrumento Guía de Análisis Jurisprudencial.

Expediente Nº 1779-2002-Lima.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

GUÍA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

TÍTULO

**"LA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 18 DEL TUO DE LA LEY N° 27444
EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA-2016"**

1.	NÚMERO DE SENTENCIA	N° 1779-2002-Lima.
2.	TIPO DE SENTENCIA	Acción de Amparo
3.	FECHA DE SENTENCIA	72 de enero del 2003.
4.	MAGISTRADO PONENTE	Alva Orlandini
5.	ACTOR O ACCIONANTE	Olimpia Alcosor Pacotaípe de Chuclón
6.	HECHOS O ELEMENTOS FÁCTICOS	Con fecha 16 de abril del 2001, la recurrente interpone Acción de Amparo contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima y su Ejecutor Coactivo, con objeto de que se suspendan los procedimientos de ejecución coactiva

		<p>de las 118 papeletas impuestas al vehículo de su propiedad por presuntas infracciones al Reglamento General de Tránsito; asimismo, solicita que cese la amenaza de captura que pesa contra su vehículo; alegando que la omisión de la notificación de todos los actos administrativos que sirven de título de ejecución, vulnera sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la propiedad.</p> <p>Expone que solicitó la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva en aplicación de la sexta disposición complementaria, inciso d), de la Ley N.º 26979, toda vez que no se le había notificado resolución administrativa alguna relacionada con las citadas papeletas, conforme lo establece el artículo 9.º de la Ley N.º 26979, y que la notificación de las resoluciones de ejecución coactiva en el diario oficial <i>El Peruano</i> no surte efecto, pues debió realizarse en forma personal; agregando, que, no obstante que el señor Victor Chuchón Conde figura como propietario del vehículo el bien materia de <i>litis</i> es un bien conyugal.</p>
7.	NORMAS CONSTITUCIONALES OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO	Artículo 139.3 el derecho fundamental al Debido Proceso que hoy en día también se ve en la vía administrativa, la cual garantiza el debido procedimiento administrativo.
8.	PROCEDIMIENTOS ANTERIORES	Demanda de Revisión Judicial ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima.

9.	PROBLEMA JURÍDICO DE LA SENTENCIA	Determinar que el diligenciamiento de las notificaciones, no fueron de acuerdo al artículo 21.3 de la ley 27444 concordante con el artículo 04 de la ley 26979, a la voz concordante con el artículo 14 de la ley 26979.
10.	DECISIÓN	Declararon FUNDADA la demanda de Acción de Amparo y infundado la sentencia de primera y segunda instancia en el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima. Por lo tanto nulo el procedimiento de ejecución coactiva.
11.	DOCTRINA DEL CASO CONCRETO EN LA DECISIÓN MAYORITARIA (TESIS)	<p>El artículo 14° de la Ley N° 26979 estableció que el procedimiento de ejecución coactiva se inicia con la notificación al obligado de la resolución de ejecución coactiva. En la sexta disposición complementaria y transitoria de la ley proclama, aplicable al caso de autos, se precisa que dicha notificación será personal con acuse de recibo en el domicilio del obligado, o por correo certificado, y que, cuando el domicilio del obligado sea desconocido, la notificación se realizará mediante la publicación, por dos veces consecutivas, en el Diario Oficial o, en su defecto, en uno de mayor circulación.</p> <p>Por lo tanto el SAT, al no haberse notificado de forma correcta a la demandante y no poder demostrar lo contrario con prueba fehaciente declaran fundado la demanda de Acción de Amparo.</p>

12.	COMENTARIOS Y CONCLUSIONES	<p>En efecto la sentencia emitida por la Primera Sala del Tribunal Constitucional, emite un pronunciamiento acertado en el sentido que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, que como ya lo he mencionado en jurisprudencias abundantes, Exp. 3891-2011; 4944-2011; 4644-2012, la observancia del artículo 139 de la constitución consagra en su numeral 3 que el debido proceso se deberá de considerar de igual forma en la vía administrativa, con la finalidad de salvaguardar los derechos del administrado.</p> <p>En el caso concreto el juez de la primera instancia como el de la segunda en proceso de apelación habían coincidido en declarar infundada la demanda del recurrente en el sentido de que había sido bien notificada al haberse notificado en el diario oficial el peruano, conforme al artículo 09 de la ley 26979, argumentando que desconocían su dirección domiciliaria.</p> <p>Por otro lado considero que el servicio de administración tributaria de Lima comete un error al pretender que se puede exigir una deuda coactivamente con el solo hecho de haberle notificado a unas de los propietarios de los vehículos materias de sanciones por papeletas de tránsito, pero que de acuerdo al artículo 14 de la ley 26979 la cual establece que la deuda será perceptible de ser cobrada coactivamente</p>
-----	-----------------------------------	--

Anexo 13

Modelo de entrevista a funcionario o experto.

ENTREVISTA (FUNCIONARIO, EXPERTOS)

“LA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 18 DEL TUO DE LA LEY N° 27444 EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA-2016”

EXPERTO- CARGO:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:

ENTREVISTA N°

LA PRESENTE ENTREVISTA TIENE COMO FINALIDAD CONOCER LA OPINIÓN JURÍDICA DE EXPERTOS EN LA MATERIA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA CON RELACIÓN A LA INOBSERVANCIA DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 18° DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444 “LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL” DENTRO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA.

Objetivo General:

Demostrar que la inobservancia del artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 por parte del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, afecta los derechos del administrado el año 2016.

- 1.- ¿Qué tan importante es para usted la notificación de los actos administrativos del Servicio de Administración Tributaria de Lima (en adelante SAT)?**

- 2.- ¿Qué entiende usted acerca del artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444 que consagra el diligenciamiento de la notificación, por parte de la administración pública?
- 3.- ¿Considera usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima lleva a cabo un debido diligenciamiento de las resoluciones que a de notificar, en garantía de los derechos del administrado?
- 4.- ¿Cree usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima al notificar un acto administrativo en domicilio distinto al administrado, afecta el derecho del administrado?

Objetivo Específico 1:

Comprobar si el Servicio de Administración Tributaria de Lima está cumpliendo de forma correcta el artículo 18 del Texto Único Ordenado de la ley 27444, o está afectando al debido procedimiento administrativo.

- 5.- ¿Considera usted que al no haber sido notificado de forma diligente el acto administrativo por parte del Servicio de Administración Tributaria de Lima se está afectando a un debido procedimiento administrativo?
- 6.- ¿Conoce usted algún órgano del Estado que sancione al Servicio de Administración Tributaria de Lima por no tener cuidado al momento de diligenciar los actos administrativos al administrado, los cuales podrían afectar el debido procedimiento administrativo?

Objetivo Específico 2:

Determinar de qué manera el incumplimiento de los plazos de notificación por el Servicio de Administración Tributaria de Lima afecta el derecho de defensa del administrado.

- 7.- ¿De qué manera considera usted que el Servicio de Administración Tributaria de Lima incumple los plazos de notificación?

8.- ¿Cree usted que el incumplimiento de los plazos de notificación por el Servicio de Administración Tributaria de Lima, afecta el derecho de defensa del administrado?

9.- ¿A su entender qué otros derechos se estarían vulnerando al no diligenciarse de forma correcta la notificación de los actos administrativos por parte de Servicio de Administración Tributaria de Lima?

.....

.....

Nombre del entrevistador

Nombre y firma del entrevistado

Anexo 14

Solicitud de validación de instrumento de recojo de información.



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

SOLICITO:

Validación de instrumento de recojo de información.

St.: ISRAEL BOLAÑA CÉSAR

Yo, JHONNATHAN ALFREDO VARGAS RIOS identificado con DNI N°. 40616972 alumno(a) de la EP de DERECHO, a usted con el debido respeto me presento y le manifiesto:

Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que vengo elaborando titulada:

LA TRANSICIÓN DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 27446 EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA, 2016.

, solicito a Ud. Se sirva validar el instrumento que lo adjunto bajo los criterios académicos correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes documentos:

- Instrumento
- Ficha de evaluación
- Matriz de consistencia

Por tanto:

A usted, ruego acceder mi petición.

Lima, 27 septiembre de 2016


JHONNATHAN ALFREDO VARGAS RIOS

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA



SOLICITO:

Validación de instrumento de
recojo de información.

Sr.: ROQUE GUERRERO NILOA YOLANDA

Yo, JHONNATHAN ALFREDO VARGAS RIOS identificado con DNI N°. 40616972
alumno(a) de la EP de DERECHO, a usted con el debido respeto me presento y lo
manifiesto:

Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que
vengo elaborando titulada:

LA INOBSERVANCIA DEL ARTÍCULO 18: DEL TUCO DE LA
LEY Nº 27444 EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE LIMA - 2016

solicito a Ud. Se sirva validar el instrumento
que lo adjunto bajo los criterios académicos correspondientes. Para este efecto
adjunto los siguientes documentos:

- Instrumento
- Ficha de evaluación
- Matriz de consistencia

Por tanto:

A usted, ruego acceder mi petición.

Lima, 27 septiembre de 2016

JHONNATHAN ALFREDO VARGAS RIOS

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

SOLICITO:

Validación de instrumento de
recojo de información.

St. Castro RODRIGUEZ Lesly

Yo Jhonathan ALFREDO VARGAS Ríos identificado
con DNI N° 40616972 alumno(a) de la EP de DELEGADO, a usted con
el debido respeto me presento y le manifiesto:

Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que
vengo elaborando titulada:
"La implementación del artículo 18 del Texto Único
Reglamentario de la Ley 27444 en el SEANISAR de ADM", solicito a Ud. Se
sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los criterios académicos
correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes documentos:

- Instrumento
- Ficha de evaluación
- Matriz de consistencia

Por tanto:

A usted, ruego acceder mi petición.

Lima, 2 de Septiembre 2017

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

SOLICITO:

Validación de instrumento de
recojo de información.

Sr. San-Hiesteban Llontua Pedro Pablo

Yo, Thannathan Alfredo Vargu R.G. identificado
con DNI N° 70616972 alumno(a) de la EP de Denacho a usted con
el deb do respeto me presento y le manifiesto:

Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que
vengo elaborando titulada:
"LA INCAPACITACIÓN DEL ARTÍCULO 18 DEL TUC
DE LA L.M. 27444 DE EL S.A.T.", solicito a Ud. So
sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los criterios académicos
correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes documentos:

- Instrumento
- Ficha de evaluación
- Matriz de consistencia

Por tanto:

A usted, ruego acceder mi petición.

Lima, septiembre de 2016

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA

SOLICITO:

Validación de instrumento de
recojo de información.

Sr. CHÁVEZ SANCHEZ JAIME ELIDER

Yo Jhonnathan ALFREDO VARGAS RÍO identificado
con DNI N° 40616972 alumno(a) de la EP de DERECHO a usted con
el debido respeto me presento y le manifiesto:

Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la tesis que
vengo elaborando titulada:
"LA INOBSERVANCIA DEL ARTICULO 18 DEL T.U.O DE LA LEY
27444 EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TA" solicito a Ud. Se
sirva validar el instrumento que le adjunto bajo los criterios académicos
correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes documentos:

- Instrumento
- Ficha de evaluación
- Matriz de consistencia

Por tanto:

A usted, ruego acceder mi petición.

Lima, 26 JUNIO 2017
septiembre de 2016

NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA